



## Consejo de Seguridad

Distr. general  
27 de septiembre de 2002  
Español  
Original: inglés

---

### **Carta de fecha 26 de septiembre de 2002, dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo**

Le escribo en referencia a mi carta de fecha 5 de junio de 2002 (S/2002/635).

El Comité contra el Terrorismo ha recibido el informe que se adjunta, presentado por Colombia con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) (véase el anexo).

Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir el texto de la presente carta y de su anexo como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) **Jeremy Greenstock**  
Presidente del Comité contra el Terrorismo  
establecido en virtud de la resolución 1373 (2001)  
relativa a la lucha contra el terrorismo



**Anexo**

[Original: español]

**Nota verbal de fecha 16 de septiembre de 2002 dirigida  
al Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido  
en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra  
el terrorismo por la Misión Permanente de Colombia ante  
Naciones Unidas**

El Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas saluda muy atentamente al Presidente del Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, y en relación con su atenta carta de 28 de mayo de 2002, con la que transmitió las observaciones preliminares del Comité contra el Terrorismo con respecto al informe presentado por Colombia en cumplimiento del párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad, tiene el agrado de remitirle la información adicional del Gobierno de Colombia, la que se anexa a la presente (véase el apéndice).

## **Respuesta adicional del informe de Colombia sobre medidas contra el terrorismo presentado en diciembre de 2001 al Comité contra el Terrorismo creado por la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas\***

### **I. Introducción**

1. El Estado colombiano reitera su compromiso en la lucha contra el terrorismo internacional y procede a dar respuesta puntual a los comentarios preliminares y preguntas formuladas por el Comité contra el Terrorismo de modo complementario al informe presentado en Diciembre de 2001 en cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 6° de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad.
2. Así mismo expresa su beneplácito por la lectura cuidadosa del reporte aludido por parte de expertos del Comité contra el Terrorismo como una clara demostración del interés de aquel en que Colombia adopte mecanismos, estrategias y políticas que contribuyan de manera eficaz a la prevención y sanción del terrorismo internacional.
3. Por lo anterior suministramos la información adicional conforme a los párrafos 3 al 6 de la Nota – Guía del 26 de octubre de 2001 y en particular su párrafo 5, la cual señala los detalles del formato preferido y la manera de presentar los informes como lo hizo el Gobierno de Colombia en su informe inicial.
4. Este Informe Adicional no contiene ningún anexo confidencial para la atención exclusiva de los miembros del CCT, tomando de este modo atenta nota de la exhortación que nos hizo el Comité sobre este punto.

### **II. Párrafo 1**

#### *Inciso (a)*

**En vista de los esfuerzos de la comunidad internacional por detener el abuso de las redes bancarias informales, nos gustaría conocer cómo esta situación se refleja o se verá reflejada en la legislación colombiana.**

5. El Código Penal Colombiano en el Capítulo de Lavado de Activos obliga a informar toda transacción sospechosa; en particular, en su artículo 325 tipifica el delito OMISION DE CONTROL en los siguientes términos:

*“El empleado o director de una institución financiera o de cooperativas que ejerzan actividades de ahorro y crédito que con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero, omita el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos por el ordenamiento jurídico para las transacciones en efectivo incurrirá por esa sola conducta en prisión ....”*

6. Tanto el Decreto 663 de 1993 Estatuto de las Entidades Financieras, como la Ley 190 de 1995 (‘Estatuto Anticorrupción’) señala la obligación de información.

---

\* Los documentos adjuntos se encuentran disponibles en la Secretaría para su consulta.

7. La operación de bancos “informales” dentro del territorio colombiano está expresamente prohibida en la legislación financiera de nuestro país. De acuerdo con el artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), las personas que deseen adelantar operaciones propias de los bancos en este país deben constituir formalmente una “entidad” para lo cual están obligados a cumplir una serie de requisitos legales y contar con la debida autorización impartida por la Superintendencia Bancaria.

8. Con el fin de garantizar que esta regla legal sea cumplida de manera permanente, el mismo EOSF obliga a la Superintendencia Bancaria a velar porque en el país nadie desarrolle la actividad bancaria de manera irregular o informal. Para ello, el artículo 326, numeral 4, literal a. del EOSF establece que la Superintendencia Bancaria deberá, cuando exista evidencia atendible, realizar visitas de inspección a las oficinas o lugares donde operen personas que puedan estar desarrollando la actividad bancaria de manera informal o ilegal y adoptar medidas eficaces a fin de preservar la confianza del público en el sistema financiero colombiano.

9. El artículo 108 EOSF faculta a la Superintendencia Bancaria para que, una vez comprobado el ejercicio informal de la actividad bancaria, se adopten una las medidas cautelares procedentes, las cuales van desde la orden de suspensión de la actividad bajo apremio de multas hasta la liquidación de la sociedad y de las operaciones bancarias que se hayan adelantado ilegalmente.

10. La Superintendencia Bancaria realiza en promedio 30 visitas al año a las oficinas de personas que presumiblemente pueden estar desarrollando actividad bancaria informal. Si bien, no en todas las oportunidades nos encontramos con casos de ejercicio informal de la actividad bancaria, muchas de estas redes informales han sido desarticuladas.

**¿Colombia está considerando imponer a las personas naturales o jurídicas, distintas a las entidades bancarias (v.g. abogados, notarías) la obligación de reportar transacciones sospechosas que pudieran estar relacionadas con actividades terroristas?**

11. Sí, en lo que respecta a la actividad notarial a través de la cual se ejerce una función pública.

12. El Estado colombiano ha venido trabajando en esta clase de medidas y fue el Decreto 1957 del 17 de septiembre del 2001, el que reglamentó el deber de información de los notarios de actos jurídicos que conozcan en el ejercicio de sus funciones, susceptibles de ser considerados como actividades sospechosas de estar relacionadas con el lavado de activos.

13. Posteriormente, la Superintendencia de Notariado y Registro, en coordinación con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), emitieron los instructivos 02-01 y 02-7 en el mes de enero y mayo de 2002, respectivamente, por medio de los cuales se describen los parámetros y la metodología que deben ser empleados por los notarios para evitar que actos notariales sean aprovechados por organizaciones criminales dedicadas al lavado.

14. No sobra indicar, de otra parte que, acatando lo establecido en la resolución 1373 de 2001 de las Naciones Unidas, el Gobierno Nacional a través de la Superintendencia Bancaria, en Carta Circular 143 de 2001, dirigida a los Representantes Legales de la

Entidades Vigiladas, impartió instrucciones con el fin de controlar eventuales transacciones de organizaciones terroristas.

**Proveer al CCT de información más detallada sobre las investigaciones criminales de personas u organizaciones que recojan fondos para financiar actos terroristas y que se investigan con el fin de identificar sus fuentes de financiamiento.**

**15. Trámites de extinción de dominio:**

- Radicado 015E.D. Luis Felipe Simanca Negrete - Ejército Popular de Liberación (E.P.L.)
- Radicado 348E.D. Raul Blanco Uribe - Ejército Popular de Liberación (E.P.L.)
- Radicado 544E.D - Fabio Martínez (Frente 29 de las Farc)
- Radicado 670E.D. Arsecio Esteban Solano y Johana Parada Olarte – Frente 59 de las Farc
- Radicado 1062E.D. Operación Guaitara (Farc)
- Radicado 1261E.D. Rodrigo Bermúdez Molina y José Helber Pacheco López - (Farc)
- Radicado 1295E.D. Operación Guaitara (Farc)
- Radicado 1124E.D. Luis Domingo Arévalo López (alias Chumingo) – Ejército de Liberación Nacional E.L.N.
- Radicado 1196E.D. Alejandro Manuel Arrieta Barrera –Pecho e fique– Ejército Popular de Liberación (EPL) y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
- Radicado 348E.D. Prestanombres del Ejército Popular de Liberación (EPL).
- Radicado 1042E.D. Elías Celis Suárez, Saúl Celis Suárez, Clara Carvajal Aguilar, Arnaldo Pérez Pabón, Luis Ernesto Blanco, Carlos Blanco, Erasmo Tarazona Mayorga y Marlene Mayorga - Ejército de Liberación Nacional (ELN).
- Radicado 1196E.D. José Alejandro Arrieta Barrera, Magola Isabel Lozano de Arrieta (EPL)
- Radicado 1198E.D. Gonzalo Rodríguez Bautista (ELN)
- Radicado 1326E.D. Ricardo Falla Ferro – Secuestro Edificio Miraflores de Neiva (Farc)
- Radicado 1327E.D. Secuestro Edificio Miraflores de Neiva – Sandy Rocío Villalba Mosquera (Farc)
- Radicado 1413E.D. Mariano Marín Cuervo - Bateman Cayon Disidencia M-19
- Radicado 1416E.D. Carlos Alfonso Cerpa (Farc)
- Radicado 1509E.D. Carlos Enrique Gómez Rodríguez (Farc)
- Radicado 1537E.D. Fredy Barros y otros - Autodefensas Unidas de Colombia AUC
- Radicado 1538E.D. Frente 22 de las Farc

**16. Investigaciones penales:**

- Radicado 209L.A. Domingo Arévalo Lopez (Alias Chumingo) – Ejercito De Liberación Nacional E.L.N..  
Delito: Enriquecimiento Ilícito
- Radicado N° 1103L.A. INFORME UIAF “CASO TAXI” (FARC)  
Contra: Reinel Guzmán, María Yuri Bolaños, Miller Carvajal, Luis Fernando Calderon, Jairo Escobar Cortes, Oscar Silva, Liliana Zuñiga, Diana Marcela Acosta Perilla  
Delito: lavado de activos.
- Radicado N° 1366L.A. PRIMITIVO VASQUEZ VARGAS  
Delitos: Enriquecimiento Ilícito
- Radicado 331L.A. Frente 45 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).  
Delito: Enriquecimiento Ilícito y Lavado de Activos
- Radicado 350L.A. Ejército Popular de Liberación (EPL).  
Delito: Enriquecimiento Ilícito
- Radicado 351L.A. Ejército Popular de Liberación (EPL).  
Delito: Enriquecimiento Ilícito
- Radicado 1023L.A. Alejandro Manuel Arrieta Barrera – Pecho Efique – Ejército Popular de Liberación (EPL) y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).  
Delito: Enriquecimiento Ilícito
- Radicado 1140L.A. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) – Bloque Caribe.  
Delito: Lavado de Activos
- Radicado 1141L.A. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) – Bloque Caribe.  
Delito: Lavado de Activos
- Radicado 1147L.A. Ejército de Liberación Nacional (E.L.N.) – Bloque Caribe. Frente José María Becerra  
Delito: Lavado de Activos
- Radicado 1169L.A. Ejército de Liberación Nacional (E.L.N.) – y Fuerzas Armadas de Colombia (FARC)  
Delito: Lavado de Activos
- Radicado N° 1265L.A. Eriberto Carabali Rivera Viveros (Autodefensas Unidad de Colombia)  
Delito: Lavado de Activos
- Radicado N° 1422L.A. Javier Alexander Niño Mendez, Hector Avelino Roja Pacheco (FARC).  
Delito: Lavado de Activos
- Radicado N° 1491L.A. Fuerzas Revolucionarias de Colombia (Farc).  
Delito: Lavado de Activos

- Radicado N° 1472L.A. Fuerzas Revolucionarias de Colombia (Farc).  
Delito: Lavado de Activos
- Radicado N° 1528L.A. Fuerzas Revolucionarias de Colombia (Farc).  
Delito: Lavado de Activos

**¿Cómo asegura la Superintendencia Bancaria que las entidades bajo su control han efectivamente adoptado e implementado los mecanismos diseñados para prevenir que las operaciones sean utilizadas para encubrir, manejar, utilizar o invertir el dinero y las utilidades derivadas de las actividades delictivas o para dar apariencia de legalidad a dichas actividades, o a las transacciones o fondos relacionados con tales actividades?**

**Procedimiento empleado por la Superintendencia Bancaria para verificar que las entidades vigiladas han adoptado mecanismos de prevención de actividades ilícitas**

17. La Superintendencia Bancaria en su calidad de organismo de supervisión, cuenta con dos herramientas legales que emplea permanentemente para el desarrollo de su tarea de vigilancia y control de las entidades financieras, y que, por supuesto, han sido el mecanismo empleado para verificar que las mismas cumplan adecuadamente con las normas sobre prevención de actividades delictivas.

18. La primera herramienta con que cuenta es la facultad de impartir instrucciones de carácter general que buscan orientar a las entidades vigiladas en el adecuado cumplimiento de las normas legales que las obligan. El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero obliga de manera general a las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria a adoptar mecanismos adecuados de control de actividades delictivas. La Superintendencia Bancaria, en desarrollo de su facultad instructiva ha expedido diversas circulares externas que han desarrollado en detalle tales disposiciones legales, y que en síntesis obligan a las entidades vigiladas a adoptar y poner en ejercicio un Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos (SIPLA).

19. La segunda herramienta con que cuenta la Superintendencia Bancaria para verificar que las entidades vigiladas efectivamente han adoptado un SIPLA y que el mismo opera adecuadamente, es el de la denominada supervisión *in situ*. La Superintendencia Bancaria desarrolla visitas de inspección en la sede de las entidades vigiladas de manera periódica y, por regla general, incluye dentro de la programación de temas a evaluar, el relacionado con la prevención de actividades delictivas. Esto, sin perjuicio de las múltiples visitas que adelanta exclusivamente con el propósito de verificar el cumplimiento de tales normas. De esta manera, la Superintendencia Bancaria mantiene un control permanente sobre la calidad de los sistemas de prevención que por disposición legal deben operar en todas las entidades vigiladas.

**¿Cuáles son las sanciones para esas entidades que incumplan con la adopción de los mencionados mecanismos, o las que no estén de acuerdo con ellos, o que adopten mecanismos insuficientes para prevenir y eliminar la financiación de actos terroristas?**

## Régimen General

20. El Artículo 65 del Código de Procedimiento Penal establece:

*“Cancelación de personería jurídica de sociedades u organizaciones dedicadas al desarrollo de actividades delictivas, o cierre de sus locales o establecimientos abiertos al público. Cuando en cualquier momento del proceso el funcionario judicial encuentre demostrado que se han dedicado total o parcialmente personas jurídicas, sociedades u organizaciones al desarrollo de actividades delictivas, ordenará a la autoridad competente que, previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello proceda a la cancelación de su personería jurídica o el cierre de sus locales o establecimientos abiertos al público.”*

21. De otra parte, el artículo 324 del Código Penal relativo a la circunstancias específicas de agravación señala que las penas privativas de la libertad previstas en el artículo que penaliza el lavado de activos, se aumentarán en una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea desarrollada por quien pertenezca a una persona jurídica, una sociedad o una organización dedicada al lavado de activos y de la mitad a las tres cuartas partes cuando sean desarrolladas por lo jefes, los administradores o encargados de las referidas personas jurídicas, sociedades u organizaciones.

### **Sanciones para las entidades vigiladas que incumplan con la adopción de mecanismos**

22. En materia de incumplimiento de las normas sobre prevención de actividades delictivas, las entidades vigiladas que incumplan las disposiciones sobre esta materia podrán ser sometidas a multas de hasta mil seiscientos millones de pesos (\$1.600.000.000.00, US\$620.000,00 aprox.); los administradores de esas entidades podrán ser sujetos a multas personales de hasta ochenta millones de pesos (\$80.000.000.00, US\$30.000,00 aprox.). Adicionalmente, la Superintendencia Bancaria puede ordenarles a las entidades apropiaciones de hasta mil seiscientos millones de pesos (\$1.600.000.000.00, US\$620.000,00 aprox.) para la implementación de mecanismos correctivos.

**Por favor describa los mecanismos que se han puesto en práctica con base en lo dispuesto del artículo 102 (1) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.**

### **Mecanismos puestos en práctica con base en lo dispuesto en el artículo 102 (1) EOSF**

23. La Superintendencia Bancaria con base en dicho artículo expidió las instrucciones contenidas en el Título Primero, Capítulo Noveno, numeral 6° de la Circular Externa 007 de 1996. Dicha circular obliga a adoptar y poner en práctica los siguientes mecanismos que de hecho conforman el ya mencionado SIPLA:

- 1) Conocimiento de clientes
- 2) Mecanismos de conocimiento del cliente por parte de grupos financieros
- 3) Conocimiento del mercado
- 4) Control de operaciones mediante:
  - a. Segmentación del mercado



- b. Consolidación de operaciones por cliente
- c. Señales de Alerta
- d. Desarrollo tecnológico
- 5) Detección de operaciones inusuales y determinación de operaciones sospechosas.
- 6) Control de transacciones en efectivo
- 7) Organización interna de la información
- 8) Capacitación
- 9) Reportes:
  - a. Relativos a las transacciones en efectivo
  - b. Reporte consolidado a la Superintendencia Bancaria
  - c. Reporte consolidado en los casos en que se celebren contratos de uso de red
  - d. Reporte de transacciones sospechosas a la Unidad Especial de Información y Análisis para el Control del Lavado de Activos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
  - e. Reporte de operaciones rechazadas por la entidad
- 10) Código de conducta
- 11) Manual de procedimientos
- 12) Auditoria sobre los mecanismos de control a través de:
  - a. Oficial de cumplimiento
  - b. Auditoria interna
  - c. Revisoría Fiscal
- 13) Conservación de documentos

**¿Colombia pretende obligar jurídicamente a las entidades a reportar operaciones sospechosas, de estar encaminadas a la financiación de actos terroristas, en relación con manejo de fondos, patrimonios o recursos económicos que no estén relacionados con actividades de lavado de dinero, por ejemplo aquellos cuya procedencia sea legal?**

24. El Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) es considerado como la materia prima para el trabajo de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). El ROS hace referencia a una operación cuya cuantía o características no guardan relación con la actividad económica de la persona, excediendo los parámetros de normalidad establecidos para determinado rango de mercado y sobre la que existen serias dudas, indicios o certeza de que su origen está vinculado con actividades ilícitas.

25. Los ROS son remitidos directamente a la UIAF por cada una de las entidades obligadas a efectuar dicho informe, siguiendo las instrucciones de los entes encarga-

dos de la inspección, vigilancia y control<sup>1</sup>. Es importante señalar que la información contenida en los ROS, recibida de entidades públicas o privadas o de personas naturales, no tiene carácter de prueba, ni de denuncia y sólo podrá ser utilizada para la labor de centralización, sistematización y análisis, a que se refiere el artículo 3º de la Ley 526 de 1999.

26. Es a partir de las labores de centralización, sistematización, evaluación y análisis de los ROS que la UIAF realiza informes de inteligencia financiera, los cuales son entregados a la Fiscalía General de la Nación para su posterior judicialización.

**Según el propósito plasmado en el documento “El camino a la Paz y la Estrategia contra el Terrorismo” en el sentido de restringir las disposiciones relativas al secreto bancario, rogamos informar al CCT sobre las medidas legislativas adoptadas con el propósito de prohibir efectivamente las cuentas anónimas o las cuentas que figuren bajo nombres evidentemente ficticios.**

27. En desarrollo del documento “El camino a la Paz y la Estrategia contra el Terrorismo”, en la actualidad el Gobierno Nacional se encuentra estudiando la posible normas dirigidas a limitar el secreto bancario, bajo la clara convicción de que esta figura no puede constituirse en un mecanismo para evadir la acción de la justicia y permitir la comisión de delitos. De esta manera, la reserva bancaria se constituye en un derecho que encuentra sus límites en el interés público representado en las investigaciones penales que se adelanten por la comisión de conductas delictivas.

28. Dentro del Comité del Centro de Coordinación de Lucha Contra los Grupos de Autodefensa Ilegales y del Comité Interinstitucional de Lucha Contra las Finanzas de la Guerrilla, el Ministerio de Defensa participa con el objetivo de debilitar su estructura financiera para disminuir su capacidad operativa y así desestimular su accionar terrorista.

29. De otra parte, mediante la Resolución 3 del 7 de junio de 2002, la Junta Directiva del Banco de la República estableció nuevos controles para las personas dedicadas profesionalmente a la compraventa de divisas, distintas de los intermediarios del mercado cambiario. Corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas, DIAN, vigilar y sancionar el incumplimiento de estas normas.

30. Adicionalmente, el régimen de cambios internacionales reglamentado por la Junta Directiva del Banco de la República (Resolución 8 de 2000), contiene diversas normas que coadyuvan en la prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo.

*6. Inciso (b)*

**¿Teniendo en cuenta que Colombia está tomando los pasos necesarios para ratificar la Convención Internacional para la Supresión de la Financiación del Terrorismo, están las respectivas autoridades responsables dispuestas a introducir modificaciones en la legislación penal con el fin de implementar lo preceptuado en este subpárrafo?**

<sup>1</sup> Superintendencia Bancaria, Superintendencia de Notariado y Registro, Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia de Sociedades, Superintendencia de Valores, Superintendencia de Salud, Superintendencia de Economía Solidaria y la DIAN.

31. La iniciativa legislativa sobre la Convención Internacional para la Supresión de la Financiación del Terrorismo, fue aprobada el pasado 20 de junio en la plenaria del Senado de la República, después de haber hecho trámite de aprobación en la respectiva Comisión el 29 de mayo de 2002. En la actualidad se encuentran pendientes dos debates en la Cámara de Representantes para concluir el trámite legislativo respectivo. Posteriormente, deberá ser sancionada por el Presidente de la República y revisada por la Corte Constitucional, luego de lo cual se procederá al depósito del instrumento de ratificación respectivo.

32. En relación con la tipificación “...como delito de la provisión o recaudación intencionales, por cualquiera medios, directa o indirectamente, de fondos por sus nacionales o en sus territorios con intención de que dichos fondos se utilicen, o con conocimiento de que dichos fondos se utilizarán, para perpetrar actos de terrorismo.”, según está previsto en el subpárrafo 1(b) de la Resolución 1373 del 13 de septiembre de 2001, emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aparte de la existente tipificación de los delitos de terrorismo o de concierto para delinquir con fines terroristas previstos en la Ley 599 de 2000 – Código Penal -; en el artículo 345 de ese mismo Código, se realizó un importante avance en esta materia al elevar a delito la *Administración de Recursos Relacionados con Actividades Terroristas*<sup>2</sup>, constituyéndose de tal modo en una eficaz herramienta para sancionar a quienes participan de esta conducta criminal prestando el apoyo económico.

33. No obstante lo anterior, una vez perfeccionado el trámite interno para que Colombia se haga parte de esta Convención, el Gobierno Nacional está dispuesto a presentar los proyectos de ley que sean necesarios para adecuar la legislación colombiana a los requerimientos de éste y otros instrumentos internacionales, para lo cual desde ya está realizando el estudio pertinente.

#### 7. Inciso (c)

**Por favor describa el procedimiento actual o previsto para el congelamiento de bienes o de activos financieros, etc. de personas o entidades sospechosas de apoyar actividades terroristas, distintos de los previstos para los mismos casos relacionados exclusivamente con el lavado de dinero.**

34. A pesar de que en nuestra legislación no existe un procedimiento especial para el “congelamiento” de bienes o de activos financieros, de personas o entidades sospechosas de apoyar actividades terroristas, aquellos activos que se encuentren relacionados con actividades delictivas, entre ellas en terrorismo, pueden ser objeto de comiso dentro de un proceso penal, conforme lo dispone el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Dicha disposición establece:

Artículo 345. *Administración de recursos relacionados con actividades terroristas. El que administre dinero o bienes relacionados con actividades terroristas, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de doscientos (200) a diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

<sup>3</sup> Artículo 67. Comiso. Los instrumentos y efectos con los que se haya cometido la conducta punible o que provengan de su ejecución, y que no tengan libre comercio, pasarán a poder de la Fiscalía General de la Nación o a la entidad que ésta designe, a menos que la ley disponga su destrucción o destinación diferente.

35. De esta manera, todas las conductas delictivas relacionadas con la financiación, sostenimiento o administración de actividades terroristas que se encuentran consagradas como lesivas del orden jurídico colombiano, tendrían a los dineros o bienes destinados para ellas como objeto material del delito, razón suficiente para que el Estado pueda pretender dichos bienes a través de la figura de comiso dentro del proceso penal.

36. La ley 333 de 1996 (anexa) relativa al proceso de extinción de dominio establece en el numeral 4 del artículo 2º que ésta se declarará sobre los bienes que directa o indirectamente se hayan utilizado “como medio o instrumento de actuaciones delictivas o se destinen a éstas, salvo que sean objeto de decomiso o incautación ordenada dentro del proceso penal o mediante providencia en firme”.

37. Como quiera que el “congelamiento”<sup>4</sup> implica la limitación del derecho de propiedad, la afectación o limitación de dicho derecho debe hacerse por orden judicial, ya sea a través de una medida cautelar con fines de comiso penal o una medida cautelar que pretenda la extinción del derecho de dominio, regulada por la nuestra Ley 333 de 1996.

---

Igual medida se aplicará en los delitos dolosos, cuando los bienes que tengan libre comercio y pertenezcan al responsable penalmente sean utilizados para la realización de la conducta punible o provengan de su ejecución.

En los delitos culposos, los vehículos automotores, naves o aeronaves, cualquier unidad montada sobre ruedas y los demás objetos que tengan libre comercio se someterán a los experticios técnicos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, contados a partir del momento en que hayan sido puestos a disposición del funcionario y se entregarán provisionalmente al propietario o legítimo tenedor, salvo que se haya solicitado y decretado su embargo y secuestro. Sin embargo, en los eventos de vehículos de servicio público colectivo, podrán ser entregados a título de depósito provisional al representante legal de la empresa a la cual se encuentre afiliado con la obligación de rendir cuentas sobre lo producido y devolución cuando el funcionario judicial así lo disponga. En tal caso, no procederá la entrega hasta tanto no se tome decisión definitiva respecto de ellos.

La entrega será definitiva cuando se garantice el pago de los perjuicios, se hayan embargado bienes del sindicado en cuantía suficiente para atender al pago de aquellos o haya transcurrido un año desde la realización de la conducta, sin que se haya producido afectación del bien.

En las investigaciones por delitos contra la propiedad intelectual, derechos de autor y propiedad industrial, o por delitos de corrupción, falsificación, alteración, imitación o simulación de productos que pongan en peligro la vida o la salud de las personas, los productos o mercancías, las publicaciones, ejemplares, reproducciones, moldes, planchas, matrices, negativos, cintas, carátulas o etiquetas incautados serán sometidos a inspección judicial con la ayuda del perito, y una vez demostrada por este medio su ilegitimidad, serán destruidas por las autoridades de policía judicial, en presencia del funcionario judicial y de la parte civil si existiere.

Los bienes incautados, destinados directa o indirectamente para la producción, reproducción, distribución, transporte o comercialización de los ejemplares o productos ilícitos, podrán ser embargados y secuestrados o decomisados de oficio y, previo avalúo, los que no deban ser destruidos se adjudicarán en la sentencia condenatoria a los perjudicados con la conducta punible a título de indemnización de perjuicios o se dispondrá su remate para tal fin.

Parágrafo. Los bienes o productos a que se refieren los artículos 300, 306, 307, 372, 373, 374 del Código Penal, una vez incautados serán sometidos a inspección judicial con la ayuda de perito, y una vez demostrada por este medio su ilegitimidad, serán destruidos por las autoridades de policía judicial, en presencia del funcionario judicial.”

<sup>4</sup> Como ya se dijo, el término “Congelamiento” no está consagrado en nuestra legislación. Sin embargo, por el se entiende la afectación o limitación del derecho de dominio a través de una medida cautelar. Existen varias figuras que se utilizan indistintamente como sinónimo de congelamiento: aprehensión, incautación, embargo, secuestro, ocupación o suspensión del poder dispositivo.

38. Es importante señalar además que las normas sobre “prevención del lavado de activos” en realidad y por disposición legal son normas sobre “prevención de actividades delictivas”, de modo tal que las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria están obligadas por el mismo conjunto de reglas legales a prevenir la financiación u ocultamiento de los recursos provenientes o dedicados a financiar actos terroristas.

**¿Cuáles son las personas o autoridades autorizadas para solicitar la confiscación o extinción del dominio en cumplimiento a lo previsto en este numeral y qué autoridad actualmente está autorizada a ordenar el congelamiento de fondos?**

39. En Colombia sólo las autoridades judiciales (jueces y fiscales) pueden ordenar la incautación, aprehensión, etc. de fondos.

40. El Juez en la sentencia es quien decide de manera definitiva sobre el comiso o la extinción del derecho de dominio.

41. Además, desde que se inicia la investigación preliminar, bien sea dentro del proceso penal o dentro de un proceso de extinción del derecho de dominio, la Fiscalía, como autoridad judicial está facultada para ordenar el comiso de fondos o activos. Si se cuenta con la evidencia necesaria que vincule el bien con la actividad delictiva, la orden de afectación puede emitirse de inmediato. En el evento de no contar con la prueba suficiente, nuestra legislación prevé, tanto en un proceso penal como en un trámite de extinción del dominio, de una etapa previa de seis (6) meses, durante la cual se deben recaudar los elementos de juicio necesarios que respalden la orden de comiso.

**¿Cuál es el término legal con que cuentan las autoridades del caso para autorizar o negar la orden de congelamiento de fondos y cuánto tiempo tomaría en la práctica la congelación de dichos fondos?**

42. Desde que se inicia la investigación preliminar, bien sea dentro del proceso penal o dentro de un proceso de extinción del derecho de dominio, la Fiscalía, como autoridad judicial está facultada para ordenar el “congelamiento” de fondos o activos.

43. Si se cuenta con la evidencia necesaria que vincule el bien con la actividad delictiva, la orden de afectación o “congelamiento”, puede emitirse de inmediato. En el evento de no contar con la prueba suficiente, nuestra legislación prevé, tanto en un proceso penal como en un trámite de extinción del dominio, de una etapa previa de seis (6) meses, durante la cual se deben recaudar los elementos de juicio necesarios que respalden la orden de “congelamiento”.

#### 8. Inciso (d)

**¿Cómo se asegura en el sistema de rastreo financiero que los fondos recibidos por asociaciones no sean desviados de sus propósitos legítimos a actividades terroristas?**

44. La Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda (UIAF) celebra convenios con las entidades encargadas del rastreo de fondos en otros países para obtener el intercambio de información, que contribuya a las labores previas de verificación, especialmente teniendo en cuenta las nuevas disposiciones internacionales contra los grupos terroristas colombianos y otras organizaciones al margen de la ley.

45. Asimismo, los acuerdos de Interpol en esta materia, contribuyen a que otros países informen oportunamente sobre movimientos sospechosos, pero hace falta que las instituciones en el nivel nacional cooperen con la oportuna información que se requiera para llevar a buen término las investigaciones que se adelantan con otros países.

46. En este sentido debe señalarse que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ha iniciado contactos con otras autoridades para el estudio del tema.

47. Es necesario que nuestro país reciba retroalimentación de países que hayan desarrollado mecanismos con los cuales se pueda monitorear los fondos recibidos por asociaciones, organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro con el fin de evitar el desvío de éstos (fondos) a actividades terroristas. Sobre este particular, mucho agradecerá el Gobierno la asistencia del Comité contra el Terrorismo.

**Por favor describa cómo la firma de convenios y el intercambio de información al interior de las unidades de inteligencia financiera ha contribuido a familiarizarse con algunas de las técnicas que pueden ser utilizadas por grupos terroristas para financiar sus actividades, así como en el seguimiento de dichos dineros y su confiscación, tal y como está señalado en el párrafo 71 del Informe de Colombia.**

48. Aunque no existen a la fecha convenios protocolizados, en algunos casos se han organizado alianzas estratégicas e intercambio de información entre las unidades de inteligencia financiera de los estamentos del Estado, las cuales han contribuido de la siguiente manera en la neutralización del financiamiento de las organizaciones terroristas:

- ☐ Identificando las modalidades delictivas utilizadas por los grupos terroristas para el lavado de activos.
- ☐ Estableciendo procedimientos para filtrar la estructura financiera de estas organizaciones y aplicar instrumentos ágiles para debilitar su poderío económico.
- ☐ Compartiendo las bases de datos existentes en los distintos organismos de investigación e inteligencia; con el objeto de evitar duplicidad de funciones y direccionar las investigaciones que se adelantan.
- ☐ Intercambiando experiencias adquiridas en el desarrollo de las investigaciones realizadas contra delitos financieros para detectar y congelar recursos de organizaciones terroristas.
- ☐ Utilizando recursos y talento humano requerido para el desarrollo de las investigaciones.
- ☐ Divulgando herramientas existentes en el marco jurídico para combatir dicho delito, tales como la ley de extinción del derecho de dominio (Ley 333 de 1.996).
- ☐ Capacitando y retroalimentando conjuntamente a los funcionarios de los diferentes organismos de investigación, en lo referente a las nuevas técnicas utilizadas por las organizaciones criminales.

49. De otra parte, la Unidad Administrativa Especial Financiera UIAF, desde junio de 2000, hace parte del Grupo Egmont<sup>5</sup>, para el intercambio de información de inteligencia financiera. A través de uno de sus grupos de trabajo, en los últimos meses se ha venido recolectando información sobre tipologías del lavado de dinero relacionadas con el terrorismo; labor que ha sido puesta en conocimiento de todos sus miembros, para su estudio correspondiente.

**En este contexto, por favor explique cuáles acuerdos han servido los propósitos de seguimiento de fondos sospechosos y su confiscación.**

50. Los acuerdos que existen en la actualidad entre instituciones del Estado que proveen información necesaria para el desarrollo de las investigaciones y la Dirección de Policía Judicial, están sustentados en los convenios de intercambio de información, permitiendo el acceso a las bases de datos mediante terminales de consulta, siendo estas las siguientes:

- ☐ Asobancaria “CIFIN”
- ☐ Cámara de Comercio a nivel distrital
- ☐ Superintendencia de Sociedades
- ☐ Superintendencia de Salud
- ☐ Catastro Distrital
- ☐ Registraduría Nacional
- ☐ Ministerio de Comercio Exterior
- ☐ Centro de información sobre actividades delictivas “CISAD”

51. A nivel internacional, debe destacarse además, que después del 11 de septiembre de 2001 al interior del Grupo Egmont se ha realizado una serie de consultas a todas las unidades de inteligencia sobre las tipologías del lavado de activos relacionadas con actividades terroristas. En este contexto, debe destacarse, que nuestro país sólo ha recibido este tipo de información a través de este Grupo, quien a su vez colaboró en los trabajos que realizó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el diseño de las 8 Recomendaciones sobre terrorismo y en la publicación del manual de tipologías de este organismo internacional, el cual incluyó algunas tipologías de lavado de activos relacionadas con terrorismo para su informe de 2001.

52. Finalmente, deben destacarse los 15 intercambios de información que Colombia ha realizado a través del Grupo, y que buscan rastrear las personas, las empresas, los grupos de personas o de empresas que pueden estar apoyando actividades de terrorismo en el mundo.

---

<sup>5</sup> Foro informal que reúne en la actualidad a 69 Unidades de Inteligencia Financiera del mundo. Es preciso anotar que Colombia acaba de ser escogida como Vicepresidente del Grupo Egmont lo cual es un reconocimiento internacional a la labor de la UIAF colombiana en tan poco tiempo de existencia.

### III. Párrafo 2

#### 9. Inciso (a)

**Teniendo en cuenta que los artículos 365 y 366 del Código Penal tipifican el porte de armas, por favor explique por qué fue necesario restringir su porte en los territorios que abarcan las 59 municipalidades señaladas en el párrafo 55 de su Informe.**

53. La Constitución Política establece que el Presidente de la República, como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad administrativa, tiene la función, entre otras, de conservar el orden público en todo el territorio nacional y restablecerlo cuando fuere turbado.

54. De esta manera, la suspensión del porte de armas puede ser ordenada por el Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales como controlador del orden público y la seguridad nacional, para ser puesta en vigor por las autoridades militares competentes. Las medidas de restricción al porte de armas han sido aplicadas en todo el país, con carácter transitorio, asociadas a eventos como elecciones, paros cívicos, manifestaciones, partidos de fútbol, etc.

55. Por otra parte, corresponde al Alcalde, como primera autoridad de policía del municipio, diseñar y desarrollar planes y estrategias integrales de seguridad ciudadana y orden público, conforme a las necesidades y circunstancias de su comunidad.

56. Sin embargo, los alcaldes aún cuando tienen la condición de jefes de la administración y primeras autoridades de policía en el municipio, sólo están autorizados legalmente, respecto del control de las armas, para proceder por intermedio de la policía a su incautación y poner tales elementos a disposición de las autoridades encargadas de decidir sobre contravenciones, para el decomiso de las mismas.

57. Por su parte, las autoridades militares señaladas por el decreto 2535 de 1993 son las que tienen la competencia para suspender de manera general los permisos para porte de armas de conformidad con el mencionado decreto, de oficio o a petición de los Alcaldes o Gobernadores.

58. Así las cosas, para el mantenimiento del orden público en las zonas urbanas se hace necesario la actuación coordinada de los alcaldes y de las autoridades militares correspondientes.

59. Esta restricción obedece entonces, al cumplimiento del deber constitucional asignado a las autoridades administrativas, tanto nacionales como de los entes territoriales de proteger la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades de los habitantes del territorio nacional.

60. Debido a los altos patrones de homicidio, era necesario aplicar medidas de carácter general para controlar el porte de armas. Tal y como lo señala el estudio del Ministerio de Defensa Nacional: *“las medidas de restricción al porte de armas buscan dificultar la comisión del homicidio y desestimular la delincuencia homicida en el país. Una medida de restricción al porte de armas tiene como consecuencia: (i) en el caso de la violencia impulsiva impedir que situaciones que puedan terminar en*



*homicidios lo hagan, y (ii) dificultar la comisión de crímenes con armas para la delincuencia al aumentar la posibilidad de retención de armas ilegales”<sup>6</sup>.*

61. Por lo expuesto, y con el objeto de implementar las estrategias de política criminal que el Gobierno Nacional venía impulsando para la reducción del homicidio, el hurto calificado y las lesiones personales, se toma la decisión de autorizar, a través de la Directiva Presidencial No. 006 del 15 de julio de 1999, a los alcaldes de los 59 municipios con mayores índices de criminalidad por arma de fuego a solicitar a las autoridades militares la suspensión general del porte de armas en las cabeceras municipales a la población civil por períodos largos. Inicialmente la Directiva estableció que esta medida se aplicaría en los 59 municipios, durante los fines de semana, entre las 9:00 de la noche y las 4:00 de la mañana del día siguiente. Esta restricción aún se viene aplicando en algunas de las principales ciudades y municipios del país, pero únicamente en su perímetro urbano.

62. Medidas similares han sido aplicadas por diferentes administraciones locales, como es el caso de Bogotá que ha aplicado este tipo de medidas en cuatro periodos distintos, desde 1994 hasta 1999, logrando reducciones en las tasas de homicidio de más de un 14%.

**¿Existe alguna disposición legal en Colombia que prohíba la adquisición de armas de fuego sin licencia (especialmente en el momento de la compra)?**

63. La adquisición de armas de fuego sin licencia está prohibida en Colombia. Así se deduce de la Constitución Nacional que consagra en su artículo 233,

*“Sólo el gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos. Nadie podrá poseerlos ni portarlos sin permiso de la autoridad competente. Este permiso no podrá extenderse a los casos de concurrencia a reuniones políticas, a elecciones, a sesiones de corporaciones públicas o asambleas, ya sea para actuar en ellas o para presenciarlas.*

*Los miembros de los organismos nacionales de seguridad y otros cuerpos oficiales armados, de carácter permanente, creados o autorizados por la ley, podrán portar armas bajo control del Gobierno, de conformidad con los principios y procedimientos que aquella señale.”*

64. De tal forma, la Carta Política, estipula que solamente el Estado tiene potestad para expedir permisos para la tenencia o porte de armas por parte de los particulares.

65. Adicionalmente, el Gobierno Nacional a través del Decreto – Ley 2535 de 1993 regula la tenencia, el porte, la comercialización, la producción y utilización de armas, municiones y explosivos en el territorio nacional. El citado Decreto consagra en su artículo 20 que “cada una de las armas existentes en el territorio nacional en manos de los particulares debe tener un permiso para su tenencia o porte, permiso que es concedido por la autoridad militar competente”. Es decir, que sólo el Estado puede autorizar su porte o tenencia.

<sup>6</sup> En: Control de Armas y Homicidio en Colombia. Ministerio de Defensa Nacional, República de Colombia Junio 2001.

66. Así mismo, los artículos 365 y 366 del Código Penal prohíben el porte de armas de defensa personal y de uso privativo de las fuerzas armadas. Estas normas no tienen límite de aplicación en el tiempo, y rigen de manera permanente.

**¿Cuáles son las sanciones actuales y las previstas para sancionar el porte ilegal de armas?**

67. De acuerdo con la Ley 599 de 2000 que instituyó el Nuevo Código Penal, se establece en sus artículos 365 y 366 penas de 1 a 4 años para aquel que sin permiso de la autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare o porte armas de fuego de defensa personal, municiones o explosivos, la pena se duplicará cuando la conducta se cometa bajo las siguientes circunstancias:

1. Utilizando medios motorizados.
2. Cuando el arma provenga de un delito.
3. Cuando se oponga resistencia en forma violenta a los requerimientos de las autoridades.
4. Cuando se empleen máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad o la dificulten.

68. Así mismo, el artículo 366 establece penas de 3 a 10 años de prisión para aquel que sin permiso de la autoridad competente importe, trafique, fabrique, repare, almacene, conserve, adquiera, suministre o porte armas o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

**Por favor describa el régimen de control en Colombia para la exportación de armas.**

69. De acuerdo con información suministrada por la Industria Militar (INDUMIL) desde hace 10 años Colombia no exporta material militar con excepción de algunos proveedores para fusil.

70. A pesar de lo anterior el Decreto 2535 de 1993 establece en su artículo 57 que “Solamente el Gobierno Nacional podrá importar y exportar armas, municiones, explosivos y sus accesorios, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional por conducto del Ministerio de Defensa Nacional”.

71. Así mismo el Decreto Reglamentario 1809 de 1994 establece en su artículo 19 que “Para los efectos del artículo 57 del Decreto 2535 de 1993, el Gobierno Nacional, a través de la Industria Militar puede importar y exportar armas, municiones y explosivos para las personas jurídicas y naturales que así lo requieran, previo cumplimiento de los siguientes requisitos”:

- A) Personas Jurídicas colombianas o extranjeras:
  - 1- Solicitud motivada en la que conste:
    - a) Clase y cantidad del material a importar (exportar).
    - b) Puerto de embarque.

- c) Puerto de llegada.
- d) Destino final (lugar de almacenamiento).
- e) Porcentaje de concentración de explosivos.
- f) Nombre del consignatario.
- g) Nombre de la casa exportadora.
- h) Empleo que se le dará al material.
- 2- Certificado de existencia y representación legal.
- 3- Concepto favorable expedido por la autoridad militar competente.
- 4- Concepto favorable expedido por la Industria Militar.
- B) Personas naturales colombianas o extranjeras:
  - 1- Solicitud escrita adjuntando los siguientes requisitos:
    - a) Certificado judicial nacional vigente y libreta militar.
    - b) Concepto favorable expedido por el Comandante de Brigada, Unidad Táctica, Base Naval o Aérea, de su residencia.

10. *Inciso (b):*

**¿Por qué el intercambio de información con otros países en la lucha contra el terrorismo y el crimen internacional en general está restringido a información clasificada como NO CONFIDENCIAL?**

72. En cuanto a la información clasificada, el intercambio en el ámbito de Interpol, está calificado como “para uso policial y judicial exclusivamente”, para que sirva a los dos propósitos, es decir que la policía de otros países la puedan utilizar para iniciar o dar continuidad a investigaciones, y para que sirva dentro de los procesos judiciales que se adelantan.

73. En pocos casos la información es rotulada como “confidencial”, con el fin de permitir que los funcionarios de las oficinas homólogas puedan realizar verificaciones con otras autoridades de forma abierta y se pueda obtener mayor información sobre determinado caso.

**Por favor suministre al CCT la información relativa al mecanismo de cooperación interinstitucional con las autoridades responsables de controlar los narcóticos, de hacer seguimiento de las operaciones financieras y de seguridad, en particular lo relativo a controles fronterizos previstos para prevenir el desplazamiento de terroristas.**

74. En lo que respecta a mecanismos de cooperación interinstitucional con autoridades responsables de controlar las operaciones financieras, en particular de controles fronterizos para prevenir el desplazamiento de terroristas, en la actualidad se intercambia información en entidades estatales como Ministerio de Relaciones Exteriores, Aeronáutica Civil, División de Extranjería del DAS, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Superintendencia Bancaria y la Unidad de Investigación y

Análisis Financiero (UIAF), con el fin de contrarrestar la circulación, transformación e inversión de capitales provenientes de actividades delictivas realizadas en las fronteras en el sistema financiero Colombiano.

75. Igualmente, se comparte información con otras entidades tales como la INTERPOL y las agencias de inteligencia de las embajadas con sede en el país; con el fin de obtener antecedentes y migración de personas al margen de la ley y realizar operaciones conjuntas a nivel internacional.

*11. Inciso (c)*

**Por favor mantenga informado al CCT sobre los progresos frente a la propuesta de enmienda al artículo 143 de las regulaciones migratorias.**

76. Con el Decreto 1384 de 2002 se modificó el Decreto del 2107 de 2001 por el cual se dictan las disposiciones sobre la expedición de visas, control y regularización de extranjeros junto a otras disposiciones en materia de inmigración. Con el Decreto 1384 se busca dar al Departamento Administrativo de Seguridad –DAS– las herramientas legales necesarias para ejercer sus funciones como autoridad migratoria.

77. Entre estas funciones se encuentra aquella por la cual, esta entidad debe mantener un registro de identificación de extranjeros con el fin controlar a aquellos ciudadanos extranjeros a los que se les hayan impuesto condenas en las que no se contempla la expulsión del territorio nacional.

78. En esta materia el Decreto 1384 de 2002, establece en primer lugar que los documentos del DAS que tienen carácter de reserva sobre ciudadanos extranjeros, pierden tal característica si son solicitados por “el titular del respectivo registro o por sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil o cónyuge o compañero permanente debidamente acreditados.” (Literal a, Decreto 2107 de 2001 modificado por Decreto 1384 de 2002)

79. Además se adiciona un párrafo al artículo 118 del mismo Decreto, en el cual se establece la renovación obligatoria, cada cinco años, de la cédula de extranjería a quienes se les haya otorgado.

80. Finalmente, se adiciona el numeral 10º al Decreto 2107 de 2001. En este numeral se establece que cuando haya sido dictada en contra de un ciudadano extranjero, una sentencia condenatoria, en la que no se contemple como pena accesoria la expulsión del territorio nacional, el Director del DAS podrá ordenar mediante resolución motivada la expulsión del territorio nacional, del extranjero.

*12. Inciso (d)*

**Habiendo tomado nota de la afirmación según la cual la Policía Nacional actúa en coordinación con las fuerzas de policía de países vecinos para compartir información y prevenir actos de terrorismo en las zonas de fronteras, por favor explique qué legislación o procedimientos existen para prevenir que los terroristas actúen desde el territorio colombiano contra otros Estados y sus habitantes?**

81. Los mencionados mecanismos funcionan dentro del marco legal de acuerdos entre primeros mandatarios o Cancilleres, y tienen como objetivo aunar esfuerzos en la

lucha contra agentes generadores de violencia, propendiendo por incrementar los niveles de seguridad, cooperación y confianza mutua entre las instituciones castrenses y entes de Derecho Internacional en general.

82. Durante las distintas reuniones, se tratan temas de carácter general que producen recomendaciones y entendimientos, con carácter “reservado”, que pretenden incrementar los esfuerzos de lucha contra la delincuencia, actuando cada país dentro de su respectivo territorio. Los temas generales abarcan aspectos como:

- Intercambio de información de inteligencia
- Intercambio de ideas y experiencias en la lucha contra los agentes generadores de violencia
- Intercambio de alumnos e instructores en cursos de capacitación y entrenamiento
- Operaciones militares simultáneas y coordinadas
- Intercambio de publicaciones de interés militar
- Canales de comunicación entre Comandos y Unidades Militares
- Cooperación técnico-logística
- Medidas de confianza mutua
- Acciones cívico militares combinadas
- Apreciaciones de situación sobre el narcotráfico, terrorismo, delincuencia común y organizada

83. Colombia ha desarrollado una serie de mecanismos en el marco de las Medidas de Fomento de Confianza implementadas y la cooperación con los países vecinos y con los de la región. Entre los mecanismos implementados cabe destacar: El mecanismo de las COMBIFROM (Comisiones Binacionales Fronterizas) con Ecuador y Venezuela; las Rondas de Conversación con Perú; las Conferencias Bilaterales de Inteligencia con Perú, Bolivia, Brasil y Chile y las Reuniones Regionales Fronterizas con Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela.

84. Para cada una de estas reuniones y conferencias se crean unos “Manuales de Procedimientos con Carácter Reservado” donde se establece el esquema de funcionamiento de estas reuniones donde se hace posible el intercambio de información y la concertación de medidas para afrontar los diferentes problemas que afectan la seguridad de los países, como el terrorismo, el tráfico de armas y el narcotráfico.

85. Se presenta a continuación una relación de los mecanismos de control existentes:

- 1) **REUNIONES ENTRE MINISTROS DE DEFENSA.** Se reúnen para fortalecer los vínculos de confianza y colaboración. Tradicionalmente se han adelantado con los Ministros de Defensa de los países fronterizos.
- 2) **COMISIONES BINACIONALES FRONTERIZAS.** Mecanismo que existe con las Fuerzas Armadas de Ecuador y Venezuela. La Comisión Binacional Fronteriza – COMBIFRON, tiene como misión evaluar y supervisar el cumplimiento de los compromisos militares y policiales de seguridad fronteriza, y proponer mecanismos que coadyuven a la solución de los problemas fronterizos y al fortalecimiento de las relaciones entre las instituciones militares.

- 3) RONDAS DE CONVERSACION ENTRE LOS ALTOS MANDOS MILITARES. En la actualidad se adelantan con las FF.AA. de Perú, y se encuentra en estudio la propuesta para llevarla a cabo con las FF.AA. de Brasil. Tienen como finalidad propender por la seguridad, cooperación y amistad binacional y regional a través del cumplimiento de las Medidas de Confianza Mutua establecidas entre ambos países.
  - 4) CONFERENCIAS BILATERALES DE INTELIGENCIA. Se realizan entre las Direcciones de Inteligencia de los Ejércitos de Colombia y los de la mayoría de países Suramericanos donde se tratan y analizan temas atinentes a la subversión, el narcotráfico, la delincuencia y los demás agentes generadores de violencia. Asimismo, las Direcciones de Inteligencia de la Armada Nacional y de la Fuerza Aérea Colombiana efectúan reuniones con sus homólogos de la región
  - 5) REUNIONES REGIONALES BILATERALES DE INTELIGENCIA. Se realizan entre Unidades de Frontera y tratan temas sobre la problemática del sector, que incluye la subversión, la narcoguerrilla, el narcotráfico, la delincuencia común y organizada, el contrabando y similares.
86. En cuanto a la labor del DAS, éste a través de la Subdirección de Interpol y de Asuntos Migratorios coordinan con las oficinas de los países fronterizos el intercambio de datos sobre posibles miembros de organizaciones terroristas que puedan actuar desde Colombia contra otros Estados. Esta información es suministrada a las demás autoridades del orden nacional que trabajan en la lucha contra el terrorismo.
87. Así mismo, se reciben constantemente solicitudes de colaboración de parte de las demás entidades de acuerdo con los parámetros establecidos por Interpol, especialmente a través de la nueva guía para la lucha contra el terrorismo internacional.
88. Los controles no están supeditados únicamente a personas, sino a las mercancías que ingresan al territorio nacional, para lo cual no se excluye a ninguna institución o empresa, ya que de no llevar a cabo los registros de mercancías en su totalidad, se facilita el ingreso de armas, municiones, explosivos, dólares y otros elementos de forma ilegal.
89. En cuanto a la labor del Departamento Administrativo de Seguridad, se adelantan las siguientes actividades:
- Control de movimiento migratorio a través de las fronteras por medio de los puestos fronterizos del DAS en puntos de frontera estratégicos con cada uno de los países vecinos.
  - Intercambio de información entre puestos fronterizos colombianos con oficinas de control migratorio de los países vecinos.
90. Los puestos migratorios de países vecinos suministran información al DAS (INTERPOL) relacionada con personas sospechosas de estar vinculadas a grupos terroristas y con la intención de cruzar nuestras fronteras.

*13. Inciso (e)*

**Por favor suministre al CCT un informe de avance sobre el proyecto de ley “establecimiento de las medidas para eliminar los crímenes de secuestro, terrorismo y extorsión, y la promulgación de otras medidas”.**

91. El 29 de enero del año en curso el citado proyecto se convirtió en la ley 733 de 2002 “por medio de la cual se dictan medidas tendientes a erradicar los delitos de secuestro, extorsión, y se expiden otras disposiciones”. El texto de la citada ley se adjunta al presente informe.

**¿Cuál es la competencia de las Cortes de Colombia para investigar actos criminales de los siguientes tipos:**

- **Un hecho cometido dentro del territorio colombiano por cualquier persona (se encuentre o no esa persona presente en Colombia);**
- **Un hecho cometido fuera del territorio colombiano por un nacional o residente habitual colombiano (se encuentre o no esa persona presente en Colombia);**
- **Un hecho cometido fuera del territorio colombiano por un nacional extranjero que se encuentre presente en territorio colombiano.**

92. La competencia de la justicia penal colombiana para investigar actos criminales, como los enunciados en esta pregunta, está definida por el Código Penal en los siguientes artículos cuyo contenido se transcribe a continuación:

#### **“DE LA APLICACION DE LA LEY PENAL**

##### ***Aplicación de la ley penal en el espacio***

*Artículo 14. Territorialidad. La ley penal colombiana se aplicará a toda persona que la infrinja en el territorio nacional, salvo las excepciones consagradas en el derecho internacional.*

*La conducta punible se considera realizada:*

- 1. En el lugar donde se desarrolló total o parcialmente la acción.*
- 2. En el lugar donde debió realizarse la acción omitida.*
- 3. En el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado.*

*Artículo 15. Territorialidad por extensión. La ley penal colombiana se aplicará a la persona que cometa la conducta punible a bordo de nave o aeronave del Estado que se encuentre fuera del territorio nacional, salvo las excepciones consagradas en los Tratados o Convenios Internacionales ratificados por Colombia.*

*Se aplicará igualmente al que cometa la conducta a bordo de cualquier otra nave o aeronave nacional, que se halle en altamar, cuando no se hubiere iniciado la acción penal en el exterior.*

*Artículo 16. Extraterritorialidad. La ley penal colombiana se aplicará:*

- 1. A la persona que cometa en el extranjero delito contra la existencia y la seguridad del Estado, contra el régimen constitucional, contra el orden económico social excepto la conducta definida en el Artículo 323 del presente Código, contra la administración pública, o falsifique moneda nacional, documento de crédito público, o estampilla oficial, aun cuando hubiere sido absuelta o condenada en el exterior a una pena menor que la prevista en la ley colombiana.*

*En todo caso se tendrá como parte cumplida de la pena el tiempo que hubiere estado privada de su libertad.*

*2. A la persona que esté al servicio del Estado colombiano, goce de inmunidad reconocida por el derecho internacional y cometa delito en el extranjero.*

*3. A la persona que esté al servicio del Estado colombiano, no goce de inmunidad reconocida por el derecho internacional y cometa en el extranjero delito distinto de los mencionados en el numeral 1º, cuando no hubiere sido juzgada en el exterior.*

*4. Al nacional que fuera de los casos previstos en los numerales anteriores, se encuentre en Colombia después de haber cometido un delito en territorio extranjero, cuando la ley penal colombiana lo reprima con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a dos (2) años y no hubiere sido juzgado en el exterior.*

*Si se trata de pena inferior, no se procederá sino por querrela de parte o petición del Procurador General de la Nación.*

*5. Al extranjero que fuera de los casos previstos en los numerales 1, 2 y 3, se encuentre en Colombia después de haber cometido en el exterior un delito en perjuicio del Estado o de un nacional colombiano, que la ley colombiana reprima con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a dos años (2) y no hubiere sido juzgado en el exterior.*

*En este caso sólo se procederá por querrela de parte o petición del Procurador General de la Nación.*

*6. Al extranjero que haya cometido en el exterior un delito en perjuicio de extranjero, siempre que se reúnan estas condiciones:*

- a) Que se halle en territorio colombiano;*
- b) Que el delito tenga señalada en Colombia pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a tres (3) años;*
- c) Que no se trate de delito político, y*
- d) Que solicitada la extradición no hubiere sido concedida por el gobierno colombiano. Cuando la extradición no fuere aceptada habrá lugar a proceso penal.*

*En el caso a que se refiere el presente numeral no se procederá sino mediante querrela o petición del Procurador General de la Nación y siempre que no hubiere sido juzgado en el exterior.*

*Artículo 17. Sentencia extranjera. La sentencia absolutoria o condenatoria pronunciada en el extranjero tendrá valor de cosa juzgada para todos los efectos legales.*

*No tendrán el valor de cosa juzgada ante la ley colombiana las sentencias que se pronuncien en el extranjero respecto de los delitos señalados en los artículos 15 y 16, numerales 1 y 2.*

*La pena o parte de ella que el condenado hubiere cumplido en virtud de tales sentencias se descontará de la que se impusiere de acuerdo con la ley colombiana, si ambas son de igual naturaleza y si no, se harán las conversiones pertinentes, comparando las legislaciones correspondientes y observando los postulados orientadores de la tasación de la pena contemplados en este código.*



*Artículo 18. Extradición. La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley.*

*Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana.*

*La extradición no procederá por delitos políticos.*

*No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación del Acto Legislativo 01 de 1997."*

14. Inciso (f)

**Por favor describa los mecanismos implementados por la Fiscalía General que facilitan la asistencia judicial recíproca entre los países.**

93. A continuación se señalan algunos aspectos sobre la cooperación penal internacional mediante los cuales se puede apreciar el desarrollo normativo y su evolución a nivel de la Fiscalía General de la Nación.

## **I. Estructura jurídica**

### **Definición del régimen jurídico de cooperación internacional**

94. En nuestro país existen unos elementos de planeación jurídica en materia de cooperación internacional, cuyo fin es construir un sólido sistema de asistencia judicial:

- Los tratados internacionales bilaterales y multilaterales son de aplicación preferencial sobre el ordenamiento interno colombiano. El sistema dispone que la normatividad interna sea subsidiaria de la normatividad internacional (Código de Procedimiento artículo 499).
- Las Cartas Rogatorias se rigen por el artículo 503 y 506 del Código de Procedimiento Penal.
- Las Notas Suplicatorias están contempladas en el artículo 272 del C.P.P. y enmarcadas dentro de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas de 1961.
- La Fiscalía General cuenta con la Resolución número 0-0024 de 15 de enero de 2002, mediante la cual se expidió el Manual de Asistencia Judicial Mutua Nacional e Internacional.

## **II. Envío de solicitudes de asistencia**

### **– Funcionarios autorizados para expedir comisiones rogatorias.**

95. De acuerdo al artículo 503 del Código de Procedimiento Penal, los Magistrados, Jueces y Fiscales se encuentran autorizados para expedir comisiones rogatorias en desarrollo de los procesos penales a cargo de sus despachos.

**– Transmisión a las autoridades extranjeras de las solicitudes de asistencia.**

96. El artículo 503 de Código de Procedimiento Penal establece que a fin de determinar la procedencia de la acción penal, de recaudar las pruebas o información, o cualquier tipo de asistencia judicial, los magistrados, jueces y fiscales, podrán concurrir o comunicarse directamente con autoridades extranjeras o por los conductos legalmente previstos.

97. Para el caso específico de las asistencias internacionales de la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo a la Resolución número 0-0024 del 15 de enero de 2002, mediante la cual se expide el Manual de Asistencia Judicial Mutua Nacional e Internacional, los Fiscales deben remitir las asistencias judiciales a la Dirección de Asuntos Internacionales, dependencia encargada de revisar el cumplimiento de las previsiones establecidas en la solicitud de asistencia de que se trate e iniciar el trámite legal pertinente, por la vía que más convenga a los intereses procesales.

**– Vías legales de transmisión.**

98. Las asistencias internacionales se remiten a través de las autoridades centrales determinadas para tal efecto en los convenios de cooperación judicial bilaterales vigentes. Para el caso colombiano, en la etapa acusatoria, se ha determinado señalar a la Fiscalía General de la Nación como esa autoridad central.

99. En algunos casos, cuando la temática lo permite, las cartas rogatorias internacionales, se envían a través de las autoridades centrales determinadas en el artículo séptimo de la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, suscrita en Viena en 1988.

100. La tercera posibilidad para la remisión de asistencias judiciales internacionales es la vía diplomática, que se surte a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Comunidades Colombianas en el Exterior.

**– Procedimiento desde la expedición de la solicitud de asistencia hasta la transmisión a la autoridad extranjera**

101. La solicitud es formulada y suscrita por el Fiscal de conocimiento del proceso y debe cumplir con los requisitos exigidos para estos casos dentro del manual interno ya mencionado.

102. La solicitud se dirige a la autoridad homóloga del estado extranjero. Cuando el funcionario judicial conoce con exactitud por cuál de las tres vías existentes debe ser tramitada la asistencia, así lo determina en la misma.

103. Sólo cuando debe remitirse a través de la vía diplomática, el Fiscal de conocimiento anexa una certificación sobre el ejercicio de su cargo, suscrita por el superior jerárquico.

104. El Fiscal del proceso, envía a la Dirección de Asuntos Internacionales la solicitud de asistencia judicial al exterior, para la correspondiente revisión. Si cumple con los requisitos del Manual de Asistencia Judicial Mutua Nacional e Internacional, se remite de acuerdo al caso específico, a la autoridad central del artículo séptimo de la Convención de Viena de 1988, a la autoridad central señalada en el acuerdo de cooperación judicial bilateral o, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para que a través de la vía diplomática se presente la solicitud internacional a la autoridad competente en el país requerido.

### III. Asesoramiento y control

105. La Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación en desarrollo de sus funciones, cumple con el asesoramiento a los funcionarios de esta entidad que requieran efectuar o responder solicitudes de pruebas al exterior.

106. La Dirección de Asuntos Internacionales, cuenta con un grupo de profesionales que atienden y resuelven las consultas de los Fiscales de la entidad que permanentemente hacen seguimiento a la evolución de la cooperación internacional.

107. La Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación es la oficina que centraliza todas las solicitudes internacionales que ingresan y egresan de la entidad.

108. Cada una de estas solicitudes es revisada por uno de los profesionales que laboran en la Dirección. Si el profesional la encuentra adecuada a la normatividad exigida inicia el correspondiente trámite hacia el exterior. Si la petición no cumple con los requisitos exigidos dentro del Manual de Asistencia Judicial Mutua Nacional e Internacional, se regresa en forma inmediata al Fiscal de conocimiento para que una vez efectúe los ajustes necesarios, la devuelva a esta Dirección para el trámite correspondiente.

### IV. Recepción de solicitudes de asistencia procedentes del extranjero

#### – Recepción de las solicitudes de asistencia procedentes del extranjero.

109. La Dirección de Asuntos Internacionales es la oficina encargada de la recepción, trámite e impulso de las solicitudes internacionales.

#### – Ejecución de las solicitudes de asistencia recibidas. Procedimiento.

110. De acuerdo al delito del cual se trate en la asistencia internacional, la Dirección de Asuntos Internacionales da traslado a la Unidad de Fiscalías que de esos delitos conoce en Colombia.

111. El Fiscal estudia la solicitud extranjera y si no es contraria a la Constitución Nacional y al ordenamiento legal procede a desarrollar lo solicitado.

#### – Recibo directo por parte del Fiscal de la solicitud de asistencia extranjera.

112. En varias oportunidades los Fiscales que hacen parte de la Fiscalía General de la Nación han recibido en forma directa las solicitudes de autoridades judiciales extranjeras.

113. Con el fin de lograr una eficiente coordinación con el país solicitante y mantener actualizada una estadística institucional, el Manual de Asistencia Judicial Mutua Nacional e Internacional, exige que en este evento se comunique a la Dirección de Asuntos Internacionales, sobre el recibo en forma directa de la carta rogatoria internacional.

#### – Solicitudes de asistencia judicial clasificadas por el país extranjero como “urgentes”.

114. Como miembros de la comunidad internacional la Fiscalía General de la Nación da cabal aplicación al principio de la buena fe, por lo que consideramos como de absoluta prioridad la especificación de urgencia dentro de una solicitud internacional.

115. De una carta rogatoria de la cual se manifieste la urgencia se da inmediato trámite, vía fax o personalmente, al Fiscal competente en la Institución, a quien se le pone en conocimiento el apremio presentado, para que el desarrollo se efectúe en forma preferencial.

**¿Cuál es el término legal dentro del cual un requerimiento de asistencia judicial dentro de una investigación o proceso penal relacionados con la financiación o apoyo a actos terroristas debe cumplirse y cuánto tiempo realmente toma poner en práctica o implementar tales requerimientos en Colombia?**

116. Sobre este particular, no existe un término legal establecido, dentro del cual un requerimiento de asistencia judicial relacionado con la financiación o apoyo a actos terroristas debe cumplirse, ni tampoco existe un parámetro previamente fijado del tiempo que realmente toma poner en práctica o implementar tales requerimientos, por cuanto en cada caso se debe tener en cuenta la especificidad de la prueba, el tipo de asistencia solicitada, el país con el que se esta llevando a cabo la asistencia judicial, entre otros aspectos.

117. Es importante resaltar que la Fiscalía General de la Nación ha implementado una estructura interna, ágil y coordinada, que permite un positivo balance, en la entrega de resultados a países extranjeros que por las diferentes vías solicitan pruebas dentro de los procesos que cursan en esta entidad.

118. En relación con las solicitudes realizadas por la entidad a diferentes países, se han propiciado espacios de acercamiento individualizados con los mismos, por conducto de las dependencias homólogas a la Dirección de Asuntos Internacionales, logrando en estos dos últimos años obtener mejores y oportunos resultados a las solicitudes de asistencia judicial internacional.

119. La asistencia judicial que Colombia brinda al exterior fluye en forma coordinada, pero muchos de los procesos iniciados en la Fiscalía General de la Nación, se ven afectados en su desarrollo por la falta de respuesta de los países extranjeros.

120. En su gran mayoría los países latinoamericanos, utilizan la vía diplomática para recibir y efectuar los requerimientos internacionales que sean necesarios para sus investigaciones, lo cual implica una prolongación en el tiempo que no resulta beneficiosa para los procesos penales.

121. Resultaría oportuno recurrir en forma directa a través de las autoridades centrales determinadas en los convenios bilaterales.

122. De igual forma hay que resaltar, la conveniencia de recurrir a las autoridades centrales predeterminadas en la Convención de Viena, para temáticas de narcotráfico.

123. La Fiscalía General de la Nación se encuentra atenta a generar a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, los espacios directos necesarios para lograr una cooperación eficiente y ágil.

15. *Inciso (g)*

**Por favor explique cómo los procedimientos encaminados a la expedición de documentos de identidad y documentos de viaje ayudan a prevenir la falsificación, adulteración e uso ilegal de los mismos, y qué otras medidas existen para prevenir dichos delitos.**

124. Los procedimientos encaminados a la expedición de los documentos de identidad y documentos de viaje ayudan a prevenir la falsificación, adulteración y uso ilegal de los mismos, mediante las siguientes medidas de seguridad físicas:

- ☐ Los documentos de identidad y viaje presentan una serie de características de seguridad, aspectos estos que no son de fácil reproducción o simulación por parte del falsificador o de la persona que desea poseer un título o documento que parezca auténtico sin serlo.
- ☐ Los documentos indispensables para su expedición deben ser originales (requisitos).
- ☐ Para la obtención de estos documentos no existen intermediarios tanto para su tramitación como para su expedición; el solicitante debe diligenciarlos personalmente.

125. La aplicación de la pena contemplada en nuestro ordenamiento jurídico es una herramienta eficaz para combatir estas conductas, así como los controles que se ejercen mediante auditorías a nivel interno en las diferentes entidades estatales que se encargan de expedir estos documentos.

126. La cédula de ciudadanía es el documento de identidad que se expide a los colombianos o extranjeros nacionalizados cuando cumplen la mayoría de edad (18 años).

127. La seguridad de la cédula de ciudadanía introducida por diversos mecanismos gubernamentales y legales, procura hacerla invulnerable a la falsificación, adulteración, duplicación y simulación, para brindarle tranquilidad a su titular y a las entidades que requieran verificar su identidad, y evitar además, la comisión de conductas punibles relacionadas con el uso ilegal del documento.

128. A finales del año 1999 se inició el plan de modernización tecnológica (PMT), en la Registraduría nacional del estado civil, con el objetivo de producir una cédula que tuviera altos niveles de calidad y seguridad. Es así como se implantó el sistema AFIS (Automatic Fingerprint Identification Sistem), en el cual existe una base de datos sistematizada donde reposan las imágenes y los datos biográficos de los ciudadanos que han solicitado cédulas por primera vez, duplicado, o rectificación en dicho lapso de tiempo.

129. En el nuevo sistema se implementaron procedimientos que garantizan la validación y legalización del documento de identidad, por eso antes de ser ingresados a la base de datos AFIS, las solicitudes deben ser validadas contra los archivos existentes en la Registraduría Nacional para evitar dobles cedulaciones o suplantaciones de personas ya que una vez incorporadas en el sistema no se puede modificar.

130. La nueva cédula de ciudadanía se produce con materiales importados que cuentan con unos niveles de seguridad para evitar la falsificación, adulteración, duplicación o simulación de la misma.

131. Los elementos de seguridad de la nueva cédula son los siguientes:

- Fondo de tramas finas con diseños antifotográficos
- Colores suaves, apastelados, para evitar su reproducción por medios mecánicos (Fotocopiado, Fotomecánicos, Scanner).
- Micro texto de seguridad no reproducibles por medios mecánicos
- Tintas birreactivas oro y plata, verificables a simple vista, con instrumental óptico y con reacción a la luz ultravioleta
- Hologramas de alta seguridad
- Código de barras bidimensional
- Código de proceso

132. Ahora bien, los procedimientos encaminados a la expedición de documentos de identidad y documentos de viaje ayudan a prevenir la falsificación, adulteración e uso ilegal de los mismos.

133. El proceso de expedición de pasaportes cuenta con tres fases básicas, por medio de las cuales se logra un mayor control:

- Revisión de la documentación,
- Elaboración del pasaporte y
- Firma del pasaporte por parte de la autoridad expedidora

134. Una vez al año, el Ministerio de Relaciones Exteriores envía funcionarios a las oficinas expedidoras de pasaportes en Colombia para verificar el cumplimiento de las normas, convenios e instrucciones por parte de las mismas y tomar las medidas correctivas.

135. De otro lado, se denuncia ante las autoridades judiciales del país la comisión de hechos punibles que se detectan en las oficinas expedidoras de pasaportes.

136. Desde el mes de enero pasado se trabaja en la expedición de un decreto de pasaportes acorde con las nuevas circunstancias que impone la realidad internacional. En el mes de julio de 2001 comenzó a circular una nueva libreta de pasaporte con diseños precolombinos y otras características como el uso de tintas grasas y fluorescentes, textos micrométricos, que además de cumplir una función de promoción de las culturas pre-hispánicas, lo dotan de una seguridad especial para evitar su adulteración.

137. Ahora bien, para la expedición de la cédula de extranjería es necesaria la presentación personal del extranjero. El documento tiene seguridades como el overlay (visos de la cinta cuando se observa la luz), ship al respaldo de la misma que al pasarla por el lector arroja los datos del foráneo, contiene la huella, firma y foto.

138. En el sistema de viajeros que se administra en los aeropuertos internacionales de Colombia y en algunos puertos terrestres, marítimos y fluviales se maneja un programa en el que se integra la información de los ciudadanos requeridos por las autoridades judiciales colombianas y los que se encuentran registrados en las bases de INTERPOL, logrando en este último caso, la coordinación a través de esta Oficina con las autoridades extranjeras.

139. Desde los lamentables hechos del 11 de septiembre de 2001, la Secretaría General de Interpol implementó una nueva estrategia con respecto a la lucha contra el terrorismo internacional, la cual incluye entre otros, crear al interior de la misma un grupo especial denominado “11 de septiembre”, el cual trabaja las 24 horas del día para facilitar las consultas de los países miembros relacionadas con personas, organizaciones, entre otros que puedan estar vinculados con el delito. Igualmente, recientemente creó la lista de vigilancia de Interpol sobre terrorismo, la cual consiste en proporcionar a todos los países afiliados y usuarios autorizados, información actualizada relacionada con pasaportes robados al igual que personas objeto de circular roja, verde en Interpol, o difusión relacionada con actos y actividades terroristas. La Secretaría General de Interpol pondrá en marcha en un futuro cercano, la página web de con la lista de vigilancia de Interpol para facilitar las consultas.

140. La lucha contra el terrorismo en el ámbito de Interpol cubre todas las actividades delictivas que puedan estar de una u otra forma vinculados con éste, los mecanismos de Interpol están a disposición de todas las organizaciones nacionales que combaten los diferentes delitos.

**Por favor describa los mecanismos de coordinación que existen con los países vecinos para el manejo de controles y seguridad fronteriza y cuyo propósito sea el de prevenir el movimiento de terroristas por las fronteras estatales.**

141. Los mecanismos de coordinación que existen con los países vecinos para el manejo de controles y seguridad fronteriza y cuyo propósito es el de prevenir el movimiento de terroristas por las fronteras estatales son:

- ☐ Enlaces permanentes con la INTERPOL y Embajadas de los países vecinos con sede en Bogotá y así mismo con la Embajada colombiana existente en otros países.
- ☐ Coordinación con el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, en relación con la cédula de extranjería del portador.
- ☐ Coordinación y enlace permanente con el Ministerio de Relaciones Exteriores y consulados existentes en el País.

142. En el marco de las competencias del Departamento Administrativo de Seguridad, la Subdirección de Asuntos Migratorios ejerce control en los puestos y aeropuertos y cuenta con personal preparado especialmente para la identificación de documentos lo que les permite establecer la autenticidad de los mismos, o si han sido hurtados, modificados o falsificados. Los controles específicos que en materia migratoria ha y viene aplicando el DAS se resumen así:

a) Aplicación de la sistematización en el control migratorio en los puertos autorizados, donde a través de una red de información, se captan y transmiten los datos del proceso migratorio hacia el nivel central. Este sistema es alimentado con la base de datos que contiene la información relacionada con las órdenes de captura, impedimentos de salida del país, requerimientos de INTERPOL y reporte de pasaportes perdidos o hurtados a nivel nacional e internacional. Igualmente, se viene actualizando en esta base de datos la información relacionada con reconocidos miembros de organizaciones terroristas internacionales.

b) Inspección de documentos en los principales puertos de control migratorio realizada por peritos, documentólogos y grafólogos con el fin de cambiar la falsedad de los mismos.

c) Control a los viajeros por personal capacitado, a fin de advertirlos en flagrancia por infracción a la Ley 30/86 o falsedad documental.

d) Inadmitir o rechazar al momento del ingreso al país, a ciudadanos extranjeros al comprobar que están incurso en alguna de las causales descritas por la normatividad migratoria. En los últimos 3 años se han presentado un total de 1.228 inadmitidos por:

- Traficar o haber traficado con estupefacientes, drogas alucinógenas o cualquier otra sustancia similar.
- Tener procesos pendientes por delitos con penas privativas de la libertad.
- Pretender ingresar al país con documentos falsos o sin la documentación legalmente exigida.
- Haber salido del territorio nacional evadiendo el control migratorio.

143. La Subdirección de Asuntos Migratorios cuenta con una base de datos sobre documentos hurtados, la cual será compartida con Interpol para cumplir con una de las disposiciones de la Secretaría General de Interpol, "creación de una base de datos de documentos hurtados, modificados y falsificados". Se buscará igualmente implementar con otras bases de datos nacionales este servicio.

144. Se verifica e intercambia información igualmente con los oficiales de enlace acreditados en Colombia, quienes nos facilitan la consecución de datos para casos que revistan mucha urgencia y quienes además identifican las necesidades propias de la institución y brindarán capacitación y apoyo logístico en diversas áreas.

145. En cuanto al control y coordinación que ejerce DAS - Interpol en Colombia con las oficinas homólogas, ésta se realiza con base en lo establecido en los estatutos de la organización. Una vez se obtiene información se envía mensaje al país que se indique, y si es necesario se establece contacto telefónico con la misma para lograr la asistencia a la mayor brevedad. Igualmente, si algún país fronterizo solicita datos sobre posibles terroristas desplazándose entre fronteras, se hace el puente que sea necesario con los demás organismos de seguridad del Estado para hacer un seguimiento o establecer si hay datos en sus archivos que sirvan para identificar o hacer un seguimiento al objetivo.

146. En el caso venezolano, existe una buena cooperación con INTERPOL Caracas, la cual se hace, de acuerdo a la urgencia de los datos, vía fax o telefónica.

#### **Encuentros bilaterales**

147. A continuación se mencionan los principales mecanismos bilaterales que Colombia tiene con países vecinos:

- Existen, como se mencionó anteriormente, las Comisiones Binacionales Fronterizas con Venezuela y Ecuador. Se estudia además la posibilidad de constituir una COMBIFRON con Panamá.
- Con Perú se instauró el Mecanismo de Alto Nivel sobre Seguridad y Cooperación Judicial Colombia - Perú y se han celebrado reuniones de Reuniones de Altos Mandos Militares.



- Con Brasil se realizan Rondas de Conversaciones entre los Altos Mandos Militares y se desarrollan medidas para fomentar la confianza mutua entre las Fuerzas Militares de Colombia y Fuerzas Armadas de Brasil.
- Con Jamaica se realizó en abril de 2001 una Reunión sobre Asuntos de Seguridad Colombia – Jamaica en la cual se suscribió el Acuerdo de Cooperación Operacional Marítima entre el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia y el Ministerio de Seguridad Nacional de Jamaica, y el Acuerdo Operacional de Cooperación Policial entre el Ministerio de Defensa Nacional de La República de Colombia y el Ministerio de Seguridad Nacional de Jamaica.

#### IV. Párrafo 3

16. *Inciso(a)*

17. *Inciso (b)*

18. *Inciso (c)*

**El Comité Contra el Terrorismo agradecería poder conocer con qué países Colombia ha suscrito tratados bilaterales de extradición y asistencia judicial recíproca.**

148. Colombia, independientemente de los tratados multilaterales de los cuales forma parte, ha suscrito tratados bilaterales en materia de extradición y asistencia judicial, de la siguiente manera:

##### **Tratados de extradición bilaterales**

1. Convención de Extradición entre Colombia y Bélgica, suscrito en Bruselas el 21 de agosto de 1912, aprobado por Ley 74 de 1913, efectuado el Canje de Instrumentos de Ratificación el 22 de abril de 1914.
  - 1.1 Convención Adicional al Tratado de Extradición entre la República de Colombia y el Reino de Bélgica, suscrito en Bogotá el 21 de noviembre de 1931. Aprobado mediante Ley 47 de 1935, efectuado el Canje de Instrumentos de Ratificación en Bruselas, el 30 de junio de 1937.
  - 1.2 Tratado Adicional a la Convención de Extradición celebrada en Bruselas el 21 de agosto de 1912, suscrito en Bogotá el 24 de febrero de 1959, aprobada por Ley 14 de 1961 publicada en el Diario Oficial No 30493 de 1961. Entró en vigor el 13 de mayo de 1968.
2. Tratado de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos del Brasil, firmado en Río de Janeiro el 28 de diciembre 1938, aprobado mediante Ley 85 de 1939. Canjeados los Instrumentos de Ratificación, en Río de Janeiro, el 2 de septiembre de 1940. Entró en vigor el 2 de octubre de 1940.
3. Tratado de Extradición entre la República de Colombia y la República de Chile, suscrito en Bogotá el 16 de noviembre de 1914, aprobado mediante Ley 8 de 1928, publicado en el Diario Oficial No 20823. Canjeados los Instrumentos de Ratificación, en Bogotá, el 4 de agosto de 1928. Entró en vigor el 4 de agosto de 1929.
4. Tratado de Extradición entre Colombia y Costa Rica, firmado en San José el 7 de mayo de 1928, aprobado mediante Ley 19 de 1931, publicado en Diario Oficial 21617.

Los instrumentos de ratificación fueron en San José, el 13 de mayo de 1931, fecha en que entró en vigor.

**5.** Tratado de Extradición entre Colombia y Cuba, suscrito en La Habana el 2 de julio de 1932, aprobado por Ley 16 de 1932 y publicada en Diario Oficial No 22111. Los instrumentos de ratificación fueron canjeados en la Habana, el 15 de octubre de 1936, fecha en que entró en vigor.

**6.** Convención de Extradición de Reos entre Colombia y el Reino de España, suscrito en Bogotá el 23 de julio de 1892, aprobada por Ley 35 de 1892, publicada en el Diario Oficial No 9.207. Los instrumentos de ratificación fueron canjeados en Bogotá, el 17 de junio de 1893, fecha de entrada en vigor.

**6.1** Canje de Notas que Desarrolla el Convenio de Extradición entre Colombia y España así como a la Convención Unica de 1961. Suscrita en Madrid el 19 de septiembre de 1991. Según Nota Verbal No.161/92 del 23 de junio de 1992 de la Embajada de España, entró en vigor el 25 de mayo de 1992.

**7.** Tratado de Extradición entre Colombia y Guatemala, firmado en Guatemala el 24 de noviembre de 1928. Aprobado mediante Ley 40 de 1930.

**8.** Tratado de Extradición entre Colombia y México, suscrito en México el 12 de junio de 1928, aprobado mediante Ley 30 de 1930, publicada en el diario Oficial No.21539. Se efectuó el Canje de Instrumentos de Ratificación en México, el 1º de julio de 1937, fecha en la cual entró en vigor.

**9.** Tratado de Extradición con Nicaragua, suscrito en Managua el 25 de marzo de 1929, aprobado mediante Ley 39 de 1930, publicada en el Diario Oficial 21550. Se efectuó el Canje de los Instrumentos de Ratificación, en Bogotá, el 15 de julio de 1932. Entró en vigor el 15 de agosto de 1932.

**10.** Tratado de Extradición con Panamá, suscrito en Panamá el 24 de diciembre de 1927, aprobado por Ley 57 del 9 de octubre de 1928, publicada en el Diario Oficial 20919. Se efectuó el canje de Instrumentos de Ratificación, en Panamá, el 24 de noviembre de 1928. Entró en vigor el 24 de diciembre de 1928.

**11.** Convención de Extradición de Reos con Perú, suscrita en Lima el 10 de febrero de 1870, publicado en los Diarios Oficiales números 1887 y 2892 de abril y junio de 1870. Se realizó el canje de ratificaciones en Lima, el 13 de marzo de 1873, fecha en la cual entró en vigor.

**12.** Tratado de Extradición entre la República de Colombia y la Gran Bretaña, firmado en Bogotá el 27 de octubre de 1888, aprobado por Ley 148 de 1888. Se realizó el canje de Instrumentos de Ratificación en Bogotá, el 21 de agosto de 1889, fecha en la cual entró en vigor.

**12.1** Convención Suplementaria del Tratado de Extradición Recíproca entre Colombia y la Gran Bretaña suscrita en Bogotá el 2 de diciembre de 1929, aprobada mediante Ley 15 de 1930, publicada en el Diario Oficial 21521. Se efectuó el Canje de Instrumentos de Ratificación en Bogotá, el 5 de noviembre de 1930, fecha en la cual entró en vigor.

**NOTA:** En virtud del principio de sucesión de Estados, el Tratado de Extradición y la Convención suplementaria entre Colombia y la Gran Bretaña se aplican para la República de Fidji, en consideración a que este país, como república independiente, mediante Canje de Notas del 14 de julio y 9 de noviembre de 1972 expresó al Gobierno de Colombia la voluntad de acogerse a los mismos.

13. Convención Recíproca para la Extradición de Reos entre Colombia y Francia, suscrita en Bogotá el 9 de abril de 1850. Entró en vigor el 12 de mayo de 1852.

14. Convención de Extradición Recíproca de los Procesados y Criminales entre la república de Colombia y la República de El Salvador. San Salvador, 24 de diciembre de 1900. Aprobado mediante Ley 64 del 30 de abril de 1905, publicada en el Diario Oficial No.12.365.

### **Acuerdos bilaterales sobre asistencia judicial en materia penal**

<i>Título del Convenio</i>	<i>Lugar y fecha</i>	<i>Vigor</i>	<i>Ley</i>
CONVENIO DE COOPERACION JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL REINO DE ESPAÑA.	Bogotá, mayo 29 de 1997	Diciembre 1° de 2000	451/98 Agosto 4 de 1998
CONVENIO DE ASISTENCIA JUDICIAL MUTUA EN MATERIA PENAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FRANCESA	París, marzo 21 de 1997	Abril 1° de 2000	453/98 Agosto 4 de 1998
ACUERDO DE COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY.	Bogotá, 31 de julio de 1997	Octubre 23 de 1999	452/98 Agosto 4 de 1998
CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ SOBRE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL.	Lima, julio 12 de 1994	Diciembre 9 de 1999	479/98 Octubre 22 de 1998.
ACUERDO DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA DE ARGENTINA.	Buenos Aires, abril 3 de 1997	Febrero 1° de 2001	492/99 Enero 21 de 1999
ACUERDO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE ASISTENCIA JURÍDICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	Ciudad de México, diciembre 7 de 1998	Junio 4 de 2001	569 de 2000
ACUERDO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA.	Caracas, febrero 20 de 1998	Febrero 1° de 2001	567 de Febrero 2 de 2000
ACUERDO DE ASISTENCIA LEGAL Y COOPERACION JUDICIAL MUTUA	Panamá, noviembre 19	Octubre 10 de 1999	450 de Agosto 4 de

<i>Título del Convenio</i>	<i>Lugar y fecha</i>	<i>Vigor</i>	<i>Ley</i>
ENTRE EL GOBIERNO LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE PANAMA.	de 1993		1998
ACUERDO DE COOPERACIÓN JUDICIAL Y ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL.	Cartagena de Indias, noviembre 7 de 1997	Junio 29 de 2001	512 de 1999
CONVENIO DE COOPERACIÓN JUDICIAL Y ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	Bogotá, diciembre 16 de 1996	Julio 26 de 2001	519 de 1999
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE SOBRE MUTUA ASISTENCIA EN MATERIA PENAL.	Londres, febrero 11 de 1997	Gran Bretaña no ha notificado cumplimiento de requisitos	462 de Agosto 4 de 1998
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CUBA SOBRE ASISTENCIA JURÍDICA MUTUA EN MATERIA PENAL.	La Habana, marzo 13 de 1998	Noviembre 3 de 2001	593 de julio 14 de 2000
CONVENIO DE COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.	Bogotá, febrero 17 de 1998	Se envió nota a la Embajada del Uruguay para fijar fecha canje de instrumentos	568 de febrero 2 de 2000.
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL.	Santo Domingo, junio 27 de 1998	No se encuentra vigente	630 de diciembre 27 de 2000
TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA POPULAR CHINA SOBRE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL.	Beijing, mayo 14 de 1999	No se encuentra vigente	Pendiente Proyecto Ley 160/2001

**¿Con qué países Colombia ha perfeccionado instrumentos bilaterales cuyo propósito sea lograr una acción concertada contra el terrorismo, mencionado en el párrafo 111 de este reporte? Por favor suministre al CCT el texto del acuerdo señalado.**

149. En febrero de 1998 los Cancilleres de Colombia y Perú canjearon notas diplomáticas constitutivas del acuerdo mediante el cual deciden que las autoridades públicas competentes se reúnan periódicamente para *“establecer mecanismos de cooperación y coordinación en materia de seguridad, compatibilización y adopción de medidas en las respectivas legislaciones contra el terrorismo y sostener un permanente y fluido intercambio de información”*. El texto de estas notas se adjunta a este Informe.

150. Además de lo anterior, la República de Colombia en la actualidad no tiene suscritos tratados bilaterales específicos de lucha contra el terrorismo; sin embargo debe advertirse que a través de los Acuerdos de Cooperación y Asistencia Judicial en Materia Penal que se encuentran en vigor se lograrán solventar los requerimientos que en materia de la represión del terrorismo se susciten.

151. De otra parte, la legislación interna establece el mecanismo por el cual se podrá prestar asistencia judicial cuando no exista un tratado en ese sentido. Tal mecanismo se encuentra previsto en los Capítulos I y II, Título I, Libro V de la Ley 600 de 2000 - Código de Procedimiento Penal -, donde se regula la prestación de asistencia judicial entre las autoridades jurisdiccionales colombianas y extranjeras.

152. Colombia firmó el 17 de junio de 2002 junto con Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela el “Compromiso de Lima” o *“Carta andina para la Paz y la Seguridad, Limitación y Control de los Gastos Destinados a la Defensa Externa”*, donde se incluyó un Compromiso Regional en la Lucha Contra el Terrorismo (apartado IV) en el cual los países se comprometieron a:

- Intensificar las acciones nacionales contra el terrorismo que se vienen ejecutando en concordancia con las disposiciones del Consejo de Seguridad, en especial la Resolución 1373 de 2001; con lo establecido en la Convención Interamericana contra el Terrorismo aprobada el 3 de junio de 2002 y con la Declaración de Galápagos “Compromiso Andino de Paz, Seguridad y Cooperación” del 18 de diciembre de 1989.
- Adoptar las medidas adicionales necesarias para prevenir la comisión de actos de terrorismo, inclusive mediante la provisión de alertas tempranas a las autoridades pertinentes, mediante el intercambio de información.
- Continuar combatiendo las actividades del crimen transnacional, especialmente las vinculadas al terrorismo como son: las drogas ilícitas, el lavado de activos y el tráfico ilícito de armas.

153. En materia regional, Colombia como miembro del Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE) contribuye al logro de los objetivos de esta organización que son:

- Mejorar el intercambio de información sobre cuestiones relacionadas con el terrorismo.
- Recopilar, legislación, acuerdos, convenios, actas Recopilar los tratados y acuerdos bilaterales, subregionales y multilaterales suscritos por los estados miembros y promover la adhesión universal a las convenciones internacionales contra el terrorismo.
- Aumentar la cooperación en las fronteras y las medidas de seguridad relacionadas con la documentación de viajes.

- Colombia se ha adherido al Plan de Acción sobre Cooperación Hemisférica para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo, en el marco del cual Los Ministros de Estado y los Jefes de Delegación de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), reunidos en Lima, Perú, en ocasión de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo, fijaron medidas comunes para la lucha contra el terrorismo.

154. Colombia presidió el subgrupo sobre Asuntos Financieros del CICTE cuyo informe final de noviembre de 2001, hace una serie de recomendaciones a los Estados para luchas contra las finanzas que promueven o son producto de las actividades terroristas.

*19. Inciso (d)*

**El CCT agradecería un informe sobre el progreso de Colombia en relación con las convenciones internacionales relevantes y los protocolos relacionados con el terrorismo, particularmente en cuanto a:**

- **Hacerse parte de los instrumentos de los cuales aún no hace parte, incluyendo la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes y la Convención Internacional para la Supresión de Atentados Terroristas cometidos con Bombas;**
- **Adopción de legislación requerida y la realización de los ajustes necesarios para implementar los instrumentos a los cuales se ha hecho parte.**

155. A continuación se presenta el listado de los convenios internacionales sobre terrorismo y su situación actual:

**Tratados en materia de terrorismo – en trámite –**

<i>Instrumento</i>	<i>Ley aprobatoria o proyecto de ley</i>	<i>Estado actual</i>
Convención Internacional contra la Toma de Rehenes. Asamblea General de las Naciones Unidas, 17 de diciembre de 1979.	Proyecto de Ley No. 226/02 Senado/	Actualmente se encuentra en estudio en el Congreso de la República (Hizo trámite en el Senado, pasa a la Cámara). Una vez sea aprobado y producida su sanción por el Presidente de la República, será enviado a control constitucional, para luego proceder a su ratificación.
Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares. Viena, 3 de marzo de 1980.	Ley No. 728/ del 27 diciembre 2001	En revisión constitucional. Una vez se produzca la sentencia por la Corte Constitucional el gobierno nacional podrá proceder a la ratificación de la Convención
Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicio de	Proyecto de Ley No. 224 /02.	Ya fue aprobado en Senado y Cámara, estando pendiente de sanción presidencial y revisión constitucional para su ratificación.

<i>Instrumento</i>	<i>Ley aprobatoria o proyecto de ley</i>	<i>Estado actual</i>
aviación civil internacional, complementario del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil del 23 de septiembre de 1971. Montreal 24 de febrero de 1988.		
Convención para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la Navegación Marítima. Roma, 10 de marzo de 1988.	Proyecto de Ley No. 225/02.	Actualmente se encuentra en estudio en el Congreso de la República (hizo trámite en el Senado, pasa a la Cámara). Una vez sea aprobado y producida su sanción por el Presidente de la República, será enviado a control constitucional, para luego proceder a su ratificación.
Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las Plataformas Fijas emplazadas en la Plataforma Continental. Roma, 10 de marzo de 1988.	Proyecto de Ley No. 225/02.	Actualmente se encuentra en estudio en el Congreso de la República (hizo trámite en el Senado, pasa a la Cámara). Una vez sea aprobado y producida su sanción por el Presidente de la República, será enviado a control constitucional, para luego proceder a su ratificación.
Convenio sobre la marcación de Explosivos Plásticos para los fines de detección. Montreal 1° de marzo de 1991.	Proyecto de Ley No. 222/02.	Actualmente se encuentra en estudio en el Congreso de la República (hizo trámite en el Senado, pasa a la Cámara). Una vez sea aprobado y producida su sanción por el Presidente de la República, será enviado a control constitucional, para luego proceder a su ratificación.
Convención Internacional para la represión de los Atentados Terroristas con Bombas. Nueva York, 15 de diciembre de 1997.	Proyecto de Ley No. 227/02.	Actualmente se encuentra en estudio en el Congreso de la República (hizo trámite en el Senado, pasa a la Cámara). Una vez sea aprobado y producida su sanción por el Presidente de la República, será enviado a control constitucional, para luego proceder a su ratificación.
Convención internacional para la represión de la Financiación del Terrorismo. Nueva York, 9 de diciembre de 1999.	Proyecto de Ley No. 223/02.	Actualmente se encuentra en estudio en el Congreso de la República (hizo trámite en el Senado, pasa a la Cámara). Una vez sea aprobado y producida su sanción por el Presidente de la República, será enviado a control constitucional, para luego proceder a su ratificación.

156. De otra parte, Colombia hizo parte del Grupo de Trabajo encargado de negociar una Convención Interamericana contra el Terrorismo creado en el seno del Consejo Permanente de la OEA que culminó sus negociaciones el pasado mes de marzo. En el marco del XXXII período de sesiones de la Asamblea General de la OEA, Colombia suscribió el mencionado instrumento. En la actualidad el Gobierno Nacional se encuentra ultimando los detalles con el fin de presentar la ley aprobatoria de este tratado al Congreso Nacional en el presente período legislativo.

157. De otra parte, se considera conveniente destacar las siguientes normas de aplicación interna que se ha aplicado para implementar los instrumentos de los cuales se ha hecho parte, a saber:

- Por medio de la Ley 14 de 1972, se incorporó un capítulo bajo la denominación “Delitos contra la seguridad aérea” en el Título VIII del Libro Segundo del Código penal Colombiano. De la misma manera, se incluyen algunas consideraciones en la sección de “disposiciones preliminares” del mismo código. Este capítulo contempla la pena de 10 a 15 años de prisión para la persona que a bordo de una aeronave en vuelo, ilícitamente, mediante violencia o cualquier otra forma de intimidación, se apodere de una aeronave o ejerza el control de la misma. Así mismo, el capítulo contemplaba una serie de agravantes para esta pena.
- El Nuevo Código de Procedimiento Penal establece en su Título III sobre “Delitos contra la libertad individual y otras garantías” Artículo 173 sobre apoderamiento de aeronaves, naves, o medios de transporte colectivo que el que mediante violencia, amenazas o maniobras engañosas, se apodere de nave, aeronave, o de cualquier otro medio de transporte colectivo, o altere su itinerario, o ejerza su control, incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de mil (1.000) a tres mil (3.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes, cuando no se permita la salida de los pasajeros en la primera oportunidad.
- Por medio de la ley 195 de 1995 se incorporó a nuestro ordenamiento interno las medidas establecidas en el Convenio Contra el Terrorismo y Extorsión de Trascendencia Internacional.
- Ley 504 de 1999, que en materia penal amplió la competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializado para conocer de diversas conductas relacionadas con el terrorismo.



- Ley 599 de 2000, por medio de la cual se expidió el nuevo Código de Procedimiento Penal, el cual entro en vigencia en julio de 2001 y recoge las disposiciones penales dictadas durante los últimos años en relación con las conductas relacionadas con terrorismo. En su Artículo 144 consagra respecto a actos de terrorismo: El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, realice u ordene llevar a cabo ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la población civil de ataques, represalias, actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla, incurrirá por esa sola conducta en prisión de quince (15) a veinticinco (25) años, multa de dos mil (2.000) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de quince (15) a veinte (20) años.
- Ley 600 de 2000, por la cual se expidió un nuevo Código de Procedimiento Penal asignando a los Jueces Penales de Circuito Especializado el conocimiento de los delitos de terrorismo y conexos.

158. La Directiva Presidencial sobre Estrategia Contra el Terrorismo del 2 de mayo de 2002, dicta medidas para reducir el margen de acción de los grupos terroristas, fortalecer la capacidad del Estado en defensa de los Derechos Humanos y para emplear y fortalecer los instrumentos internacionales en la lucha contra el terrorismo.

20. *Inciso (e)*

**¿Han sido incluidos los crímenes señalados en las convenciones internacionales relevantes como delitos susceptibles de extradición en los tratados bilaterales que Colombia ha perfeccionado con otros países?**

159. A pesar que Colombia no tiene suscritos tratados de extradición específicos por terrorismo, ello no significa, de ningún modo, que esta posibilidad se encuentre vedada. Consideramos que existen al menos tres hipótesis de extradición de terroristas, según los siguientes planteamientos:

160. El primer caso, están los eventos en que Colombia tiene suscrito y en vigor un tratado bilateral de extradición en el cual no se ha previsto un listado de delitos; en tal circunstancia se debe observar si los presupuestos formales y sustanciales del caso en particular confrontados con los presupuestos adoptados en el instrumento permiten realizar el trámite de extradición por esta vía.

161. En segundo lugar, se tendrían los casos que se pueden presentar en relación con un país con el cual Colombia tiene suscrito y en vigor un tratado bilateral de extradición donde se incluya un listado de delitos dentro de los cuales no se contempla el de terrorismo y, a la vez, igualmente son partes de una convención multilateral en la cual se incluya dicha conducta como susceptibles de extradición. En esas condiciones se entendería que esa conducta quedaría comprendida entre el listado de delitos del tratado bilateral, dando lugar a que los trámites de extradición por terrorismo se tramiten por dicha vía.

162. En tercer lugar, la legislación interna establece el mecanismo por el cual se podrán realizar trámites de extradición cuando no exista un tratado en ese sentido. Tal mecanismo se encuentra previsto en el Capítulo III, Título I, Libro V del Código de Procedimiento Penal, trámite de derecho interno al cual pueden acceder otros Estados, una vez atendidos los requisitos legales, especialmente los señalados en el

artículo 511 del C.P.P, sobre tipificación, naturaleza y quantum punitivo y preexistencia de resolución de acusación o su equivalente.

21. *Inciso (f)*

**¿Cuáles son los mecanismos mencionados en el párrafo 115 del Informe que pueden garantizar que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia no otorgará el estatus de refugiado a personas que hayan “planeado, facilitado o participado en la comisión de actos terroristas”? Están esos mecanismos resumidos en el párrafo 116 del Informe y regidos por el Decreto 1598 de 1995 que podrían ser revisados con miras a mejorar dichos mecanismos (párrafo 118 del Informe)?**

163. Los mecanismos mencionados en el párrafo 115 del Informe presentado por Colombia están resumidos en el párrafo 116, pero no todos se encuentran regidos por el Decreto 1598 de 1995. El identificado con el literal c), compete a la función de la actual coordinación de Visas e Inmigración, oficina dependiente de la Dirección de Asuntos Consulares y Comunidades Colombianas del Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores. La función específica de investigación corresponde al Departamento Administrativo de Seguridad DAS.

164. El procedimiento básicamente consiste en realizar un detallado estudio a la solicitud de refugio por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores en el cual se analizan de manera profunda aspectos relacionados con la situación jurídica y de derechos humanos del solicitante, al igual que la situación política del país de origen del solicitante. Es de resaltar que la entrevista es una importante herramienta en la evaluación de la solicitud de refugio, pues permite tener un mayor grado de certeza acerca de la veracidad de los hechos a los que alude el solicitante. Se ha considerado conveniente que en la entrevista participen expertos en el tema, al igual que un psicólogo.

165. En la búsqueda de mecanismos adecuados para el estudio del solicitante es preciso asegurar que el estatuto del refugiado no será utilizado de manera ilegítima. Se propenderá por fomentar la cooperación sobre esta particular con otras naciones. Así mismo, es preciso velar por una pronta adhesión a protocolos y convenios internacionales relacionados con terrorismo como mecanismo adicional con estos fines.

166. Cabe señalar que la Convención (art. 1, literales E y F) y Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados privilegian la vida del solicitante de refugio, pero también determina los casos de no aplicación de la misma, los cuales son seguidos atentamente por Colombia cuando es pertinente.

167. Se está estudiando un proyecto de decreto por el cual se establece “el procedimiento para la determinación de la condición de refugiado, se dictan normas sobre la Comisión Asesora para la determinación de la condición de Refugiado y se adoptan otras disposiciones”, en el cual se encuentra trabajando el Ministerio de Relaciones Exteriores con el apoyo del DAS.

22. *Inciso (g)*

**El CCT ha tomado nota del retiro de las reservas que Colombia tenía en relación con la Convención contra la Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, incluyendo Agentes Diplomáticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1973 y mencionada en el párrafo 112 del Informe.**

**¿Lo previsto en las convenciones internacionales más relevantes relacionadas con la extradición tienen prevalencia frente a las disposiciones constitucionales que prohíben la extradición por delitos políticos?**

168. El tema de extradición se encuentra regulado en el artículo 35 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 1997, en los siguientes términos:

*“Artículo 35. La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley.*

*Además, la extradición de colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana. La ley reglamentará la materia.*

*La extradición no procederá por delitos políticos.*

*No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma”. (subrayado fuera de texto)*

169. En consecuencia y toda vez que nuestra Constitución prohíbe la extradición por delitos políticos, ningún tratado internacional podría ir en contra de esta disposición.

170. El trámite de ratificación de un tratado internacional incluye, además de la aprobación de la ley por parte del Congreso Nacional de y la sanción presidencial, el control por parte de la Corte Constitucional de la exequibilidad de la ley aprobatoria del tratado. De este modo, un instrumento internacional que contravenga la disposición superior señalada arriba, sería declarado inconstitucional por dicho tribunal.

171. De este modo, Colombia no tiene suscritos instrumentos de derecho internacional público en los cuales se incluya la obligación de su parte de conceder la extradición de personas investigadas o condenadas por delitos políticos o conexos a ellos.

172. El artículo 18 de la Ley 599 de 2000 “por la cual se expide el Código Penal”, básicamente transcribe la misma norma constitucional. A su vez, la Ley 600 de 2000 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal” en los artículos 508 y siguientes desarrolla el trámite judicial administrativo de dicha institución, señalando de manera precisa las competencias de las diferentes autoridades, según el momento procesal correspondiente.

173. Es de señalar, que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, al examinar los trámites de extradición debe tener en cuenta entre los presupuestos de derecho para emitir concepto los señalados en el artículo 520 del C.P.P., que dispone:

*“Artículo 520. Fundamentos. La Corte Suprema de Justicia, fundamentará su concepto en la validez formal de la documentación presentada, en la demostración plena de la identidad del solicitado, en el principio de la doble incriminación, en la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y, cuando fuere el caso en lo previsto en los tratados públicos.”*

174. En el evento de concepto negativo en trámite de extradición por parte de la Corte Suprema, el mismo es de naturaleza vinculante para el Ejecutivo.

**¿Existe alguna normatividad interna ya operante que asegure que los móviles políticos no sean reconocidos como justificación para rechazar los requerimientos de extradición de presuntos terroristas?**

175. No. Como ya se dijo, la Constitución de 1991 fue reformada mediante el acto legislativo 01 de 1997 para permitir la extradición de nacionales colombianos tal como quedó citado anteriormente.

176. De lo cual se deduce, que el ordenamiento jurídico colombiano no permite la extradición por razón de delitos políticos.

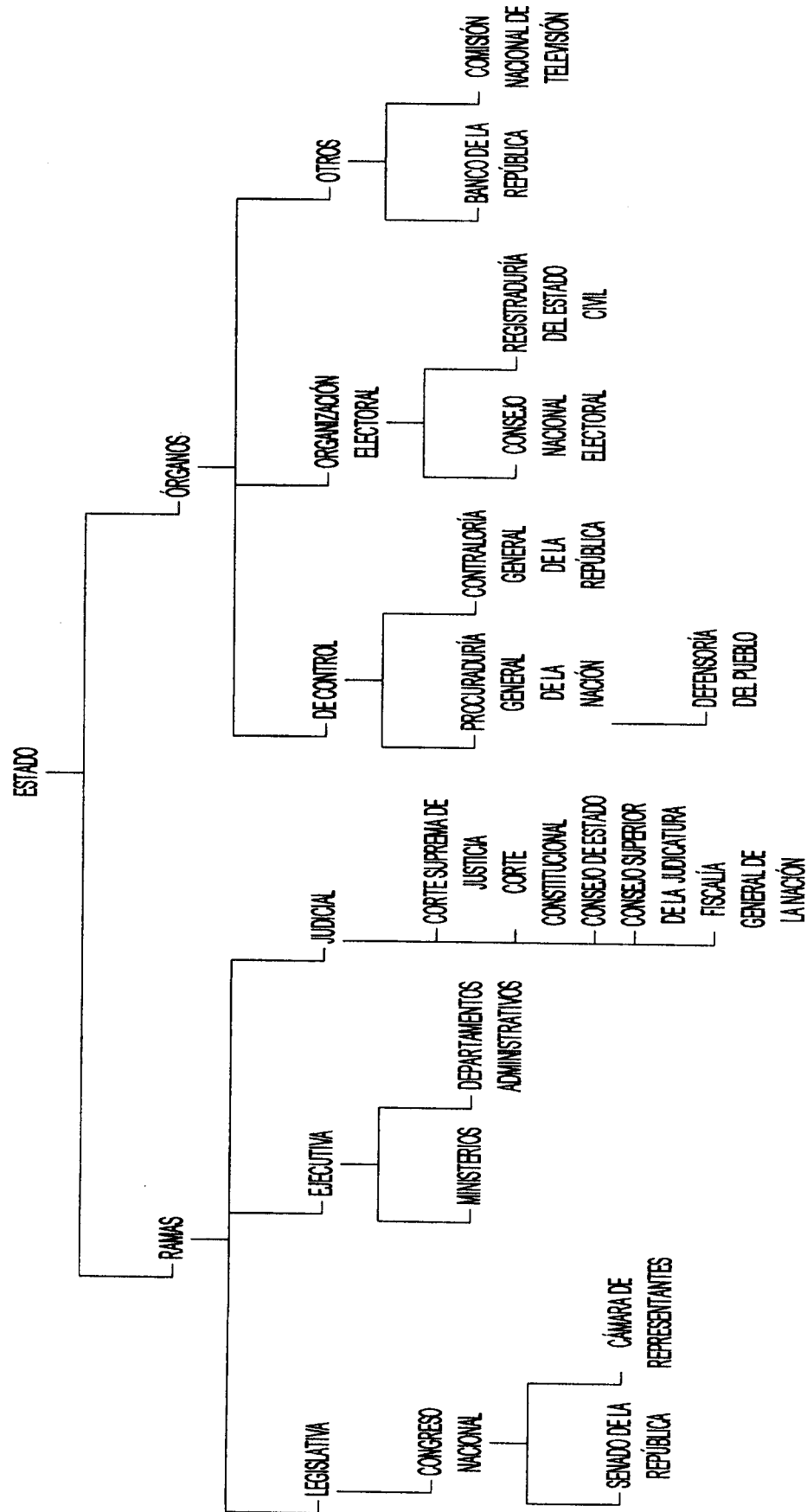
#### **IV. Párrafo 4**

##### **Otras materias**

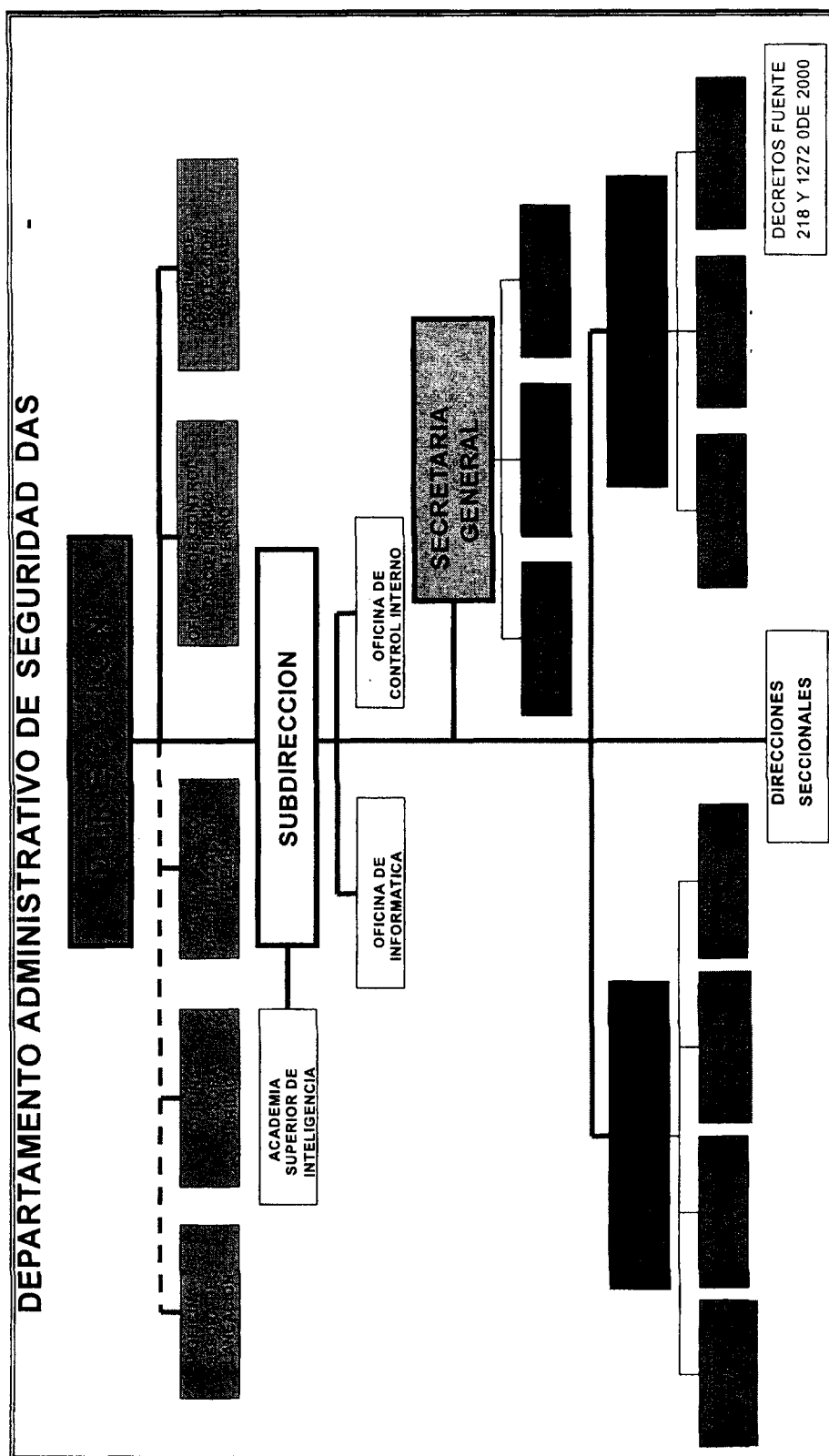
**¿Puede Colombia suministrar un organigrama de su estructura administrativa, como la de la Policía, controles migratorios, impuestos y autoridades para la vigilancia financiera, establecida para dar efectos prácticos a las leyes, regulaciones y otros documentos que son vistos como adecuados para el cumplimiento de esta Resolución?**

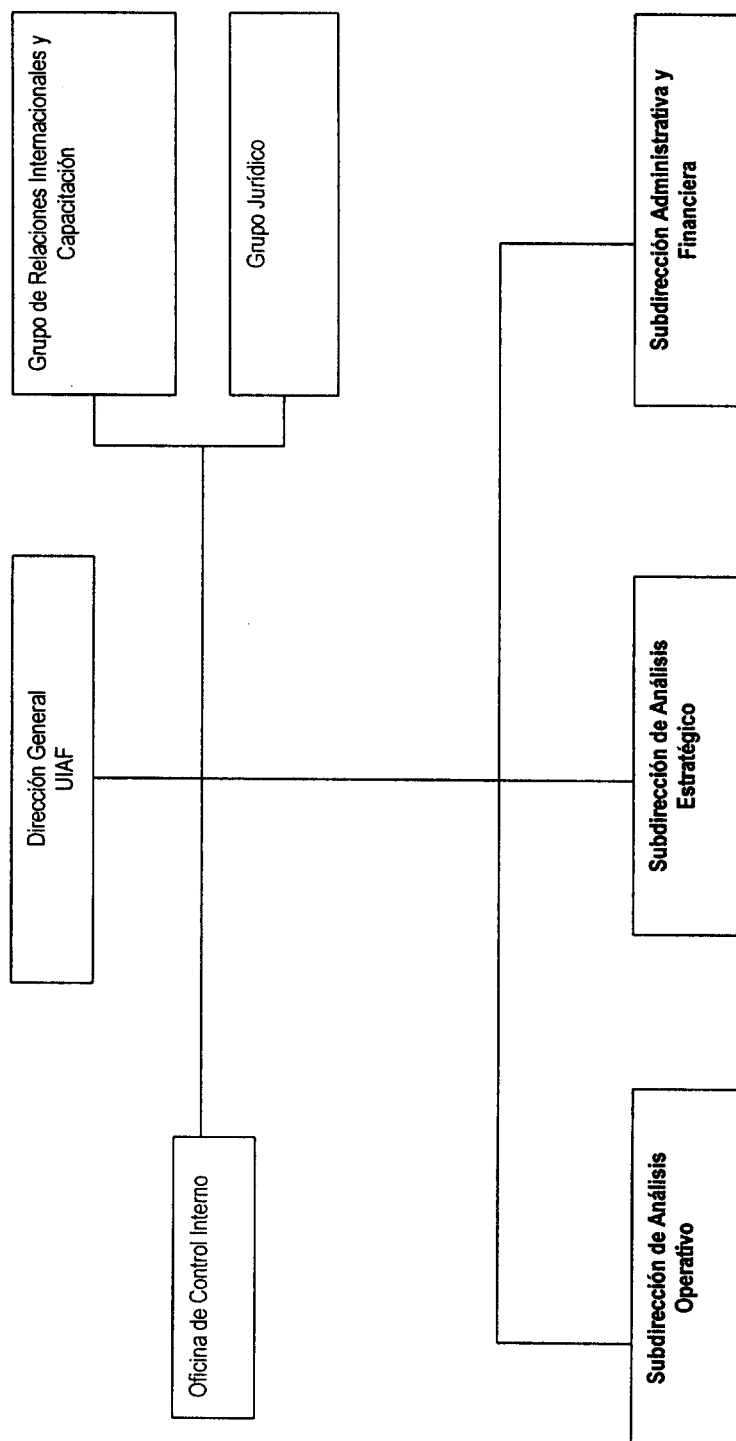
177. Se anexan el Organigrama General del Estado Colombiano y los de algunas entidades nacionales involucradas en la lucha contra el terrorismo.

# ESTRUCTURA BÁSICA DEL ESTADO COLOMBIANO

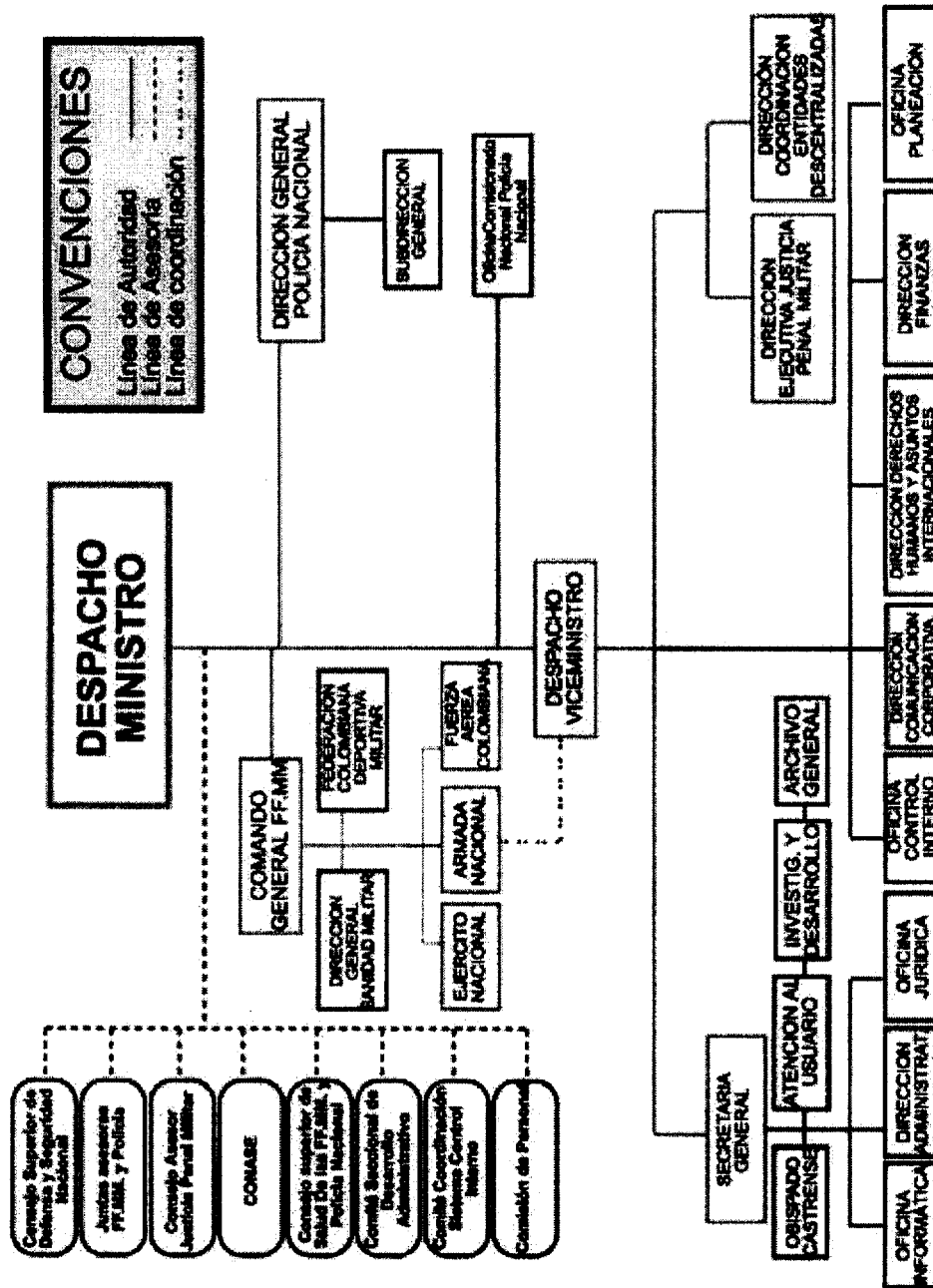


**ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD D.A.S.**



**ORGANIGRAMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ANÁLISIS FINANCIERO**

## ORGANIGRAMA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL





## ORGANIGRAMA POLICÍA NACIONAL

